



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO EN HISTORIA



TRABAJO FIN DE GRADO

Director/a: Susana Truchuelo Garcia

Co-director/a: Benita Herreros Cleret de Lagavant

Curso 2018/2019

Las Indias y los nuevos espacios jurídicos: el Derecho indiano. Leyes para los virreinos (siglos XVI y XVII)

The Indias and the new legal spaces: Indian law. Laws for the viceroyalties (XVIth & XVIIth centuries)

César Aparicio Arce

Septiembre 2019

RESUMEN

La justicia en las Indias siempre se ha presentado como una tarea pendiente de la Monarquía Hispánica, que alejada de sus posesiones americanas era incapaz de prestar toda su atención a lo que allí sucedía. Pero lo cierto es que desde la segunda década de la conquista, a comienzos del siglo XVI, las deficiencias en el sistema indiano dieron la voz de alarma en Castilla, y desde ese mismo momento se comenzó a llevar a cabo una enorme labor legisladora que iría tanto hasta la preparación de leyes propias para el territorio, como la creación de instituciones judiciales, o la exportación de hombres de letras hacia la América en un intento por conseguir que la justicia castellana fuese establecida en las posesiones más allá del mar. No fue perfecta, pero era una labor inconmensurable, y desde la distancia se hizo tanto como el desconocimiento de lo que allí sucedía permitió a la monarquía de los Habsburgo.

PALABRAS CLAVE

Derecho indiano – Monarquía Hispánica – América – Nueva España – Perú



ABSTRACT

Justice in the Indias has always presented as a pending task of the Hispanic Monarchy, which, far from its American possessions, looked without concern at what happened. But the truth is that since the second decade of the conquest, at the beginning of the 16th century, the deficiencies in the Indian system raised the alarm in Castile, and from that very moment a huge legislative labour began to be carried out which would go from the preparation of own laws for the territory, such as the creation of judicial institutions, or the export of men of letters to America in an attempt to get the Castilian justice established in the possessions beyond the sea. It was not perfect, but it was an immeasurable labour, and from the distance it was done as much as ignorance of what was happening there allowed to the Habsburg monarchy.

KEYWORDS

Indian right – Hispanic Monarchy – America – New Spain – Peru

Índice

INTRODUCCIÓN	1
1. PACTISMO ENTRE MONARCAS Y VASALLOS	2
2. LOS CIMIENTOS DEL DERECHO INDIANO.....	6
2.1. LAS CAPITULACIONES.....	6
2.2. LAS BULAS ALEJANDRINAS	11
2.3. EL DERECHO CASTELLANO	14
2.4. LA COSTUMBRE INDÍGENA.....	16
3. LA CODIFICACIÓN DEL DERECHO INDIANO	18
4. LA FORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DE JUSTICIA	23
4.1. VIRREINATO DE LA NUEVA ESPAÑA	24
4.2. VIRREINATO DEL PERÚ.....	26
5. LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y LOS INDÍGENAS	29
6. LOS JURISTAS: EDUCACIÓN Y VIDA SOCIAL	34
6.1. EDUCACIÓN.....	35
6.2. SALARIO, DONES Y VIDA SOCIAL	36
CONCLUSIONES	40
ANEXOS.....	42
BIBLIOGRAFÍA.....	49
WEBGRAFIA	53
IMÁGENES.....	53

INTRODUCCIÓN

El 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón y los tripulantes de las tres carabelas pisaban tierras americanas. El paraíso que se abría ante sus ojos, una suerte de Jardín del Edén, iba a proveer a Castilla, y en general, al mundo, de diversísimos productos durante siglos. Pero las cosas no fueron como hubiesen deseado. Desde el comienzo los problemas asolaron al Almirante, que actuó de forma errónea creyendo que su principal valedora, Isabel la Católica, apoyaría su plan de comerciar con la población indígena. Por el contrario, la devota monarca de Castilla otorgó a aquellos pobres *miserables* la condición de vasallos, dándoles la misma condición que sus súbditos castellanos. ¿Pero cuánto tardarían los nuevos integrantes de la Corona en recibir y disfrutar de sus nuevos derechos?

Los primeros años de la conquista del Nuevo Mundo se caracterizaron por ser especialmente problemáticos, suscitando la creación de una serie de instituciones y normas que rigiesen la vida en América. Sin embargo, la andadura de estas hasta la consecución de un sistema más o menos estable será larga y tendrá que superar los obstáculos que ponían freno a su funcionamiento.

A lo largo de tres siglos la Casa de los Austrias gobernó con mano dura contra todos aquellos que trataron de cometer o cometieron ataques contra los nativos, con una legislación y castigos que cargaban contra los súbditos españoles con fuerza. Es por esto que es necesario conocer todo lo que rodeó al desarrollo del derecho en las Indias, tanto de sus instituciones, las bases de su *corpus* legislativo, la preparación de los administradores de justicia, o los diversos intentos de recopilación de sus normas.

El desarrollo del sistema tendrá fallos que intentarán solventarse durante el paso de los años, pero aún así, la intención era la misma: otorgar a las Indias un *corpus* legislativo para asegurar que la tradición jurídica recibida en Castilla durante siglos atravesase el océano intentando respetar las costumbres y tradiciones de los naturales americanos.

1. PACTISMO ENTRE MONARCAS Y VASALLOS

Uno de los grandes problemas del gobierno de las Indias, tanto para los indígenas por los efectos adversos sobre los mismos, como para el monarca por el desprecio a su autoridad, siempre fue la distancia. Jamás un monarca español pisó las posesiones en Ultramar, y de cara al gobierno representó un auténtico problema, pues la ausencia de este implicó todo tipo de desmanes en detrimento de la población autóctona. En efecto, las tierras más allá del mar hubieron de sufrir grandes daños por la falta de una figura paterna que asegurase su bienestar *in situ*, pero no fueron pocos los esfuerzos de los Habsburgo en un intento por mejorar la vida de aquellos que se encontraban antes que los colonizadores.

«De la buena administracion de justicia tenemos los reyes especial cargo en la tierra, por Dios nuestro señor, porque con ella se provee que su divina magestad sea servida y no ofendida, y que los malos sean castigados, y los buenos honrados, y que los pueblos vivan en toda paz y sosiego, y quando por culpa de los reyes ó de sus lugartenientes no se hace la justicia, como se debe, quanto mayores son los daños y ofensas que dellos se siguen á Dios nuestro señor y á la cosa publica, tanto mas encargan su consciencia ante Dios, y el mundo, por ende os encomendamos y encargamos muy afectuosamente que desto tengáis especial cuidado y miréis y mandéis á los del consejo, que la justicia se administre igualmente con todos, sin acepción de personas de manera que se vea que la justicia no se hizo para los que poco pueden.»¹.

De esta forma advertía Carlos V a su hijo Felipe II sobre la administración de justicia que tenía que procurar el príncipe a sus súbditos durante la ausencia del rey, ya que el monarca sabía de la necesidad de tener un reino feliz, sobre todo cuando el comienzo de su reinado había dado inicio con algunos problemas. Tanto la guerra de las Comunidades de Castilla (1520-1522) como las Germanías (1519-1523), además de haber supuesto un golpe a la autoridad real, consiguieron hacer comprender al monarca aquello que *Las Siete Partidas* dejaban claro tres siglos antes:

«Amado deue ser mucho el pueblo de su rey, e señaladame(n)te, les deue mostrar amor, en tres maneras. La primera auiendo merced dellos, faziendoles merced, qua(n)do ente(n)diere, q(ue) lo han menester: ca pues el es alma, e vida del pueblo. (...) seye(n)do ma(n)tenidos co justicia. La segu(n)da, auie(n)doles piedad, doliéndole dellos, qua(n)do

¹ LAIGLESIA, F.de (ed.). *Instrucciones y consejos del emperador Carlos V a su hijo Felipe II al salir de España en 1543*. Madrid: Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, 1908; pp. 35-36. Disponible en: <https://bit.ly/2Zp2oUr> (Consulta: 10/07/2019).

les ouielle a dar alguna pena. (...) La tercera, auiendoles misericordia, para perdonarles a las vegadas, la pena que merescieren, por algunos yerros, que ouinessen fecho.»²

Y del mismo modo, lo que tiempo después publicaría Sebastián de Covarrubias en su *Tesoro de la lengua castellana*. La definición de “vassallo” hacía hincapié en un aspecto muy relevante de la relación existente entre gobernante y gobernados, esto es, la correlatividad de ambos, pues, «(...) porque ni avrá señor sin vassallos, ni vassallos sin señor»³. El emperador comprendió que sin el reconocimiento de los súbditos el poder que había conseguido no hacía más que pulular por enormes y vastos territorios (*fig. 1*), especialmente si estos se encontraban tan alejados como los de América.

La *Idea de un príncipe político cristiano* de Diego Saavedra Fajardo también intentó, durante el reinado de Felipe IV, mostrar cuáles habrían de ser las virtudes del monarca, y al igual que *Las Partidas* — citadas por el propio autor —, conseguir el buen gobierno en beneficio de la relación existente entre el rey y sus súbditos.

«Aprendan los príncipes (...) a mantener sus personas y estados con el amor de los súbditos, que es la más fiel guarda que pueden llevar cerca de sí (...)»⁴

Para Saavedra el buen monarca no podía gobernar mediante el uso de la violencia porque «(...) por esto las abejas eligen un rey sin aguijón, porque no ha menester armas quien ha de ser amado de sus vasallos»⁵, y aunque tanto lo escrito por este como las obras de Alfonso X o Covarrubias escapan a la órbita de Carlos V y su época, dejan patente el ímpetu en la búsqueda de un gobierno justo, por lo que parece claro que desde el primer Austria siempre se intentó encontrar la unión entre el monarca y los súbditos mediante un pacto — semejante al contractualismo del XVIII — que acabaría mostrándose en toda una serie de legislaciones que otorgaron a las Indias, en general, y a los indígenas, en particular, del *corpus* necesario para la buena administración de ambos, o lo que es lo mismo, el Derecho Indiano.

La enorme variedad de situaciones que la América colonial aportaba al sistema judicial convertiría la necesidad en una virtud, y desde los primeros compases de la

² LÓPEZ, G. *Las Siete Partidas del sabio rey don Alfonso el nono, nuevamente glosadas por el Licenciado Gregorio Lopez del Consejo Real de Indias de Su Magestad*, Tomo I. Madrid: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 1985; p. 30.

³ COVARRUBIAS, S. de. *Tesoro de la lengua castellana o española*, segunda parte; p. 203. Disponible en: <http://cort.as/-MWK2> (Consultado: 10/07/2019).

⁴ SAAVEDRA FAJARDO, D. “Idea de un príncipe político cristiano” (edición de Enrique Suárez). *Lemir-Textos*, nº 20, 2016; 519-968, p. 693. Disponible en: <https://bit.ly/2MyxWDZ> (Consultado: 10/07/2019).

⁵ *Ídem*.

conquista fue menester establecer un entramado jurídico que asegurase la equidad en la administración de justicia. Pero el primer paso para alcanzar dicha meta hubo de ser el reconocimiento de los indígenas como vasallos de la Corona, algo que ya había hecho en primera instancia la abuela del emperador, Isabel la Católica, y así lo exigía en las instrucciones a Nicolás de Ovando en 1501:

«Item: diréys de nuestra parte a los caciques e a los otros prencipales, que Nos, queremos que los yndios sean bien tratados como nuestros buenos súbditos e vasallos, e que nenguno sea osado de les facer mal nin dapño; e ansí lo abéys de mandar de nuestra parte pregonar; e si dende aquí adelante alguno les ficiere algún mal o dapño, o les tomasen por fuerza algo de lo suyo, que vos lo fagan saber, porque vos lo castigaréys en tal manera que dende aquí adelante nenguno sea osado de les facer mal ni dapño a otro»⁶

Podría interpretarse entonces una cierta *buena voluntad* que tuvieron los monarcas en la búsqueda del bien para los indígenas, más allá de los desbarajustes ocasionados por algunos de los colonos con las encomiendas. Ciertamente, el mayor problema al que tuvieron que enfrentarse los reyes fueron las concesiones de indígenas a los colonos como premio, las cuales, sumadas a otros factores, produjeron la disminución de la población autóctona en los inicios de la conquista, sobre todo en Las Antillas⁷, y a pesar de los intentos por suprimir las encomiendas los beneficiados por ellas siempre se tornaron combativos ante la pérdida de estas. Pero también, y como ya se mencionó — cuando hacía referencia a la dificultad de gobernar desde la lejanía —, otros tantos mandatos fueron incumplidos por los habitantes hispanos de las Indias, pues no hay que olvidar las distancias existentes entre la metrópoli y las colonias, las cuales ocasionaban la extinción de muchas demandas por no haber obtenido una respuesta a tiempo⁸.

⁶ *Instrucciones al comendador fray Nicolás de Ovando, gobernador de las Islas y Tierra Firme del mar Océano, para el buen tratamiento de los indios*. 16/08/1501. Disponible en <http://cort.as/-PXqK> (Consultado: 12/07/2019). También es de sobra conocida la frase de la reina al enterarse de que Colón había repartido en encomienda a trescientos indios en La Española: «¿Con qué autoridad dispone el Almirante de mis vasallos?» en HANKE, L. *La lucha por la justicia en la conquista de América*. Madrid: Istmo, 1988; p. 31.

⁷ Bien es cierto, y como señala Owensby, que el decrecimiento de la población autóctona parecía más lógico en un lugar como La Española, ya que el número de habitantes no era tan amplio como en Nueva España («unos 20.000.000 contra unas centenas y luego unos miles de españoles y negros importados de África»). Asimismo, los novohispanos fueron igualmente subyugados con el auge de los colonos y sus malas prácticas para con estos. Véase OWENSBY, B.P. “Pacto entre rey lejano y súbditos indígenas. Justicia, legalidad y política en Nueva España, siglo XVII”. *Historia de México*, LXI, 2011 (1); 59-106, p. 67.

⁸ Si se tiene en cuenta que el primer viaje de Colón (partida desde Palos y llegada a la isla de Guanahani), de acuerdo a su diario de a bordo, duró 70 días (El compendio que hace Bartolomé de las Casas sobre el viaje de Colón así lo muestra: «Partimos viernes 3 días de agosto de 1492 años de la barra de Santas a las ocho horas (...) Jueves 11 de octubre. Esta tierra vido primero un marinero que se decía Rodrigo de Triana (...) Amañaron todas las velas (...) y pusieron a la curda, temporizando hasta el día viernes, que llegaron a una isleta de los Lucayos, que se llamaba en lengua de indios Guanahani»), es comprensible entonces la ineficacia en muchas ocasiones de los designios reales, de la aplicación de justicia, o de cualesquiera otras

Para Hanke,

«La conquista de América por los españoles no fue solo una extraordinaria hazaña militar (...) sino, a la vez, uno de los mayores intentos que el mundo haya visto de hacer prevalecer la justicia y las normas cristianas en una época brutal y sanguinaria»⁹

De hecho, algo tremendamente relacionado con estas palabras fue la burocratización del imperio. Si con los Reyes Católicos la cantidad de documentos generada había sido de un volumen considerable, con el reinado de Carlos V, y sobre todo con el de Felipe II, sería ingente. Cientos de documentos circularon hacia las Indias en un intento por mejorar la calidad de vida de los indígenas, que asumidos como menores de edad dispuestos para el tutelaje de los españoles¹⁰, fueron adquiriendo «privilegios especiales ante la justicia»¹¹. Bien es cierto que los indígenas no tardaron en quejarse de las deficiencias del sistema, pero es comprensible si se tiene en cuenta que cada zona de la América colonial englobaba a miles de comunidades indígenas con un amplio abanico de costumbres, lo que convertía en obligación el establecimiento de múltiples pactos, y de manera consecuente, la elaboración de una legislación que se ajustase a las características propias de todas y cada una de las comunidades de indios. El *ius commune* era la base de la relación entre el rey y los indios, y en general, de toda la humanidad, por eso los individualismos tenían que ser perfectamente asumidos — y respetados — como parte de un todo que aglutinase de forma eficiente las vicisitudes del Derecho consuetudinario indígena (o de la costumbre, más bien, dada la inaplicabilidad del término “Derecho”).

Poco a poco, la consecución de logros en distintos ámbitos hizo que los indígenas se volviesen más exigentes con la práctica judicial, pero la figura del monarca quedó ensalzada a pesar de no haberlo visto jamás. En efecto, las menciones a la figura del soberano aparecían constantemente de muy diferentes formas: en documentos, en la toma

comunicaciones. Véase CRISTÓBAL COLÓN, *Los cuatro viajes del almirante y su testamento*. Biblioteca virtual universal, pp. 29-30. Disponible en http://cort.as/-MT_p (Consultado: 12/07/2019). Parece haber cierta confusión con el nombre del marinero que avistó las tierras americanas, y varios testigos aseguran que su nombre era Juan Rodríguez Bermejo. Véase FERNANDEZ URRESTI, M. *Colón: el almirante sin rostro. Una biografía heterodoxa*. Madrid: EDAF, 2006; p. 286.

⁹ HANKE, L. *Op. cit.*, introducción, s.p.

¹⁰ «I en nuestros Indios, es forçoso que lo digamos, pues por su corta capacidad gozan del privilegio de rústicos, i menores, i aun no pueden disponer de sus bienes raíces, quanto mas de sus personas, i libertad». De este modo muestra Solórzano Pereira la incapacidad de los indígenas, y de ahí su estado de tutelados. Véase SOLÓRZANO PEREIRA, J. de. *Política indiana*, Tomo I; p. 81. Disponible en: <http://cort.as/-MZZK6> (Consultado: 12/07/2019).

¹¹ OWENSBY, B.P. *Op. cit.* p. 73.

de posesión de cargos y tierras, etc. Además de esto, los indios manejaron con soltura las formas españolas de protocolo con las que dirigirse al monarca, y fue de uso común el uso de fórmulas que mostrasen deferencia e hiciesen percibir cuál era la visión sobre este, como menciona Owensby al referirse a una carta de caciques y nobles de México donde se refieren al rey «como un pastor y un padre»¹².

En definitiva, es incomprensible la formulación del Derecho Indiano sin incluir el pacto monarca-súbditos, pues aunque la voluntad de los Austrias fue la de defender a los indígenas vinculándose de forma inseparable al concepto de “Derecho”, lo cierto es que el trasfondo no era otro que el de la sumisión. Por esta razón, la definición que Covarrubias le dio a la palabra “vassallo” toma tanta fuerza: porque el buen rey toma conciencia del estado de sus súbditos, pues sin ellos o su consentimiento, no gobierna sobre nada. Lo único relevante es el mantenimiento de los súbditos bajo cualquier pretexto.

2. LOS CIMIENTOS DEL DERECHO INDIANO

Una vez descubiertas, conquistadas y colonizadas, las posesiones americanas habían de poseer una legislación auténtica que otorgase a aquellas tierras un estatus jurídico equivalente al que la Corona poseía en Castilla. Este habría de estar compuesto de la enorme tradición legal castellana, que desde tiempos pretéritos había ido recogiendo el testigo de sus predecesores; de una serie de documentos que acreditaban el derecho de los españoles a tomar y permanecer en dichas plazas, y algo de vital importancia: la costumbre indígena, que permitiría que cada región estuviese prevista de sus propias normas. Todo esto podría entrar en conflicto, en especial el derecho castellano y la costumbre indígena, pero para ello se procedió con la jerarquización de las normas, consiguiendo evitar algunos problemas, y también proponer para Castilla el uso de algunas normas de los indios.

2.1. LAS CAPITULACIONES

Los viajes de exploración no solían responder al deseo de los Reyes Católicos¹³, ni de Carlos V, sino de esos que ahora son conocidos como “conquistadores”. Su

¹² *Ibidem*, p. 91.

¹³ Sí que es cierto que Fernando el Católico solicitó una expedición al Nuevo Mundo en 1508, pero en modo alguno las demás fueron por iniciativa regia, sino de los propios navegantes. Véase HERNAN CORTÉS, *Cartas de la conquista de México*. Madrid: Sarpe, 1986; “los hechos”, s.p. «El estudio de sus cláusulas (de las capitulaciones) pone de relieve que sólo en muy contadas ocasiones — los viajes colombinos, las

iniciativa, apoyada por los monarcas, tenía una contrapartida: descubrir, tomar posesión y conseguir pruebas de lo allí encontrado a cambio de algunas mercedes. Eso son, ni más ni menos, las capitulaciones¹⁴; mercedes concedidas por los soberanos a los navegantes que marchan al descubrimiento de nuevas tierras para la incorporación de estas a la Corona.

Así pues, la primera de estas, como no podría ser de otro modo, fue la firmada en Santa Fe (Granada) con Cristóbal Colón. El documento estaba basado «en los principios jurídicos imperantes en la Castilla de entonces»¹⁵, sobre todo si se destaca un aspecto muy relevante: el proyecto estaba apoyado por la reina, cabeza de Castilla, por lo que tanto las Indias como las propias *capitulaciones de Santa Fe* (fig. 2) quedaron adscritas al Derecho Castellano. Como ya se mencionó previamente, este documento solamente es una carta de merced en la que se establecen una serie de suculentos premios en el caso de que Colón alcance las Indias. En todo caso, solamente en el inicio del documento ya se hace visible lo que se acaba de mencionar:

«Las cosas suplicadas e que Vuestras Altezas dan e otorgan a don Christoval de Colon, en alguna satisfacion de lo que ha descubierto en las Mares Oceanas y del viage que agora, con el ayuda de Dios, ha de fazer por ellas en servicio de Vuestras Altezas, son las que siguen»¹⁶

Las concesiones a Colón fueron acordadas antes de partir para América, probablemente porque el fracaso del viaje no supondría demasiadas pérdidas — y claro está, la consecución del propósito, grandes beneficios —, de otro modo la Corona jamás habría otorgado al explorador tantos y sustanciosos títulos y beneficios económicos¹⁷.

expediciones de Pedrarias Dávila y la de Magallanes — participó el Estado directamente en el costeamiento de los gastos» en OTS CAPDEQUI, J. M. *El Estado español en las Indias*. México: El Colegio de México, 1941; p. 16.

¹⁴ Según el *Tesoro* de Covarrubias: «los conciertos, condiciones, y pactos, que se dan por escrito, para conuenir unos con otros, especialmente en casamientos». Véase *Tesoro de la lengua castellana o española*, primera parte; p. 134.

¹⁵ BERNAL, B. “Las características del Derecho Indiano”, *Historia de México*, XXXVIII, 1989 (4); 663-675, p. 663.

¹⁶ Archivo de la Corona de Aragón. Libro de Registro de la Chancillería aragonesa. Lib. 3569, ff. 135 v.-136. En MORALES PADRÓN, F. *Teoría y leyes de la conquista*. Madrid: Ediciones Cultura Hispánica del Centro Iberoamericano de Cooperación, 1979; p.54.

¹⁷ «Título de Almirante sobre todas las islas y tierras firmes (...) vitalicio, hereditario y perpetuamente (...) Título de Visorrey y Gobernador general en las dichas islas (...) El décimo de las riquezas o mercancías obtenidas (...) Si a causa de estas mercancías o riquezas (...) se origina pleito, los Reyes autorizaban a Colón o a sus tenientes a que conozcan tal litigio (...) Se le permitía contribuir con la octava parte en la armazón de navíos que fueran a tratar y negociar a las tierras descubiertas. A cambio recibiría otra octava parte de las ganancias» en MORALES PADRÓN, F. *Historia del descubrimiento y conquista de América*. Madrid: Editora Nacional, 1981; pp. 98-99.

En el caso de Hernán Cortés, que partió de Cuba en 1519, no hay capitulación alguna, pues en su caso fue Diego Velázquez, gobernador de la isla, quien le entregó las instrucciones sobre su cometido en Yucatán. De hecho, había una palpable mala relación entre ambos, y una serie de acontecimientos acabaron por convencer al gobernador de la necesidad de confiarle la misión a otro, como este encuentro en las calles de Santiago que narra W.H. Prescott:

«La importancia que daba á Cortés su nueva comision y quizá algo tambien su altivo porte, fueron agriando el ánimo de Velazquez que suspicaz por naturaleza, empezó á temer que no se alzase su encargado con el poder que acababa de conferirle. Un incidente fortuito vino á confirmarle en sus sospechas. Un bufón (...) llamó aparte al gobernador una mañana que éste estaba paseándose cerca del puerto con Cortés, y le dijo: “Sr. Velazquez, tened cuidado con Cortés, ó si no, de un día al otro nos traerá á las vueltas este capitán.” “¿Habeis oído lo que dice este bellaco?” preguntó el gobernador á su compañero. “No le hagáis caso,” respondió Cortés: este es un bribon descarado que merecía una buena azotaina. Las palabras del bufon labraron profundamente en el ánimo de Velazquez, que en efecto no estaba muy lejos de ser chasqueado.»¹⁸

En efecto, la expedición fue cancelada, pero Cortés partió del mismo modo para Yucatán. En este caso, la misión no contó con ningún otro apoyo que la iniciativa propia¹⁹, razón por la cual Cortés no cuenta con capitulaciones previas. Es cierto que Carlos V otorgó a Cortés el título de capitán general de Nueva España, el de marqués del Valle de Oaxaca, y entró a formar parte de la Orden de Santiago como merced por «grandes y señalados servicios á los Católicos Reyes (...) é á nos»²⁰, pero no fue hasta octubre de 1529 cuando se le concedió una capitulación para «descubrir por la “mar del Sur”»²¹ firmada por la reina.

¹⁸ PRESCOTT, W. H. *Historia de la conquista de México*, Tomo I. México: Ignacio Cumplido, 1844; p. 182.

¹⁹ «Los fondos que habia reunido los empleó en la compra de buques, provisiones y aprestos militares, habilitando á los reclutas que no tenían de por sí para armarse, ofreciéndoles ademas anticipadamente, parte de los productos que esperaba sacar» en PRESCOTT, W.H. *op. cit.* p. 178.

²⁰ *Título de Capitán General de la Nueva España y costa del Sur, expedido a favor de Hernán Cortés por el Emperador, por Carlos I de España y V de Alemania*. 06/07/1529. Disponible en <http://cort.as/-MvQr> (Consultado: 14/07/2019).

²¹ VAS MINGO, M. M. del. “Hernán Cortés, capitulante”. *Quinto Centenario*, 1985 (9); 157-174, p. 161. Lo cierto es que parece haber una contradicción con lo dicho por del Vas Mingo y lo que señala Icazbalceta en su *Colección de documentos para la historia de México*. En la obra aparece recogido el documento de merced a Hernán Cortés con fecha del 23 de julio de 1529, pero concedido y firmado por el rey y no por la reina como apunta Vas Mingo. De hecho, Icazbalceta señala en una nota al pie que fueron varias las mercedes concedidas a Cortés ese día, pero de acuerdo con lo que dice Vas Mingo todas ellas deberían haber sido firmadas por la reina debido a la ausencia del monarca, que se encontraba en Flandes. Véase GARCÍA ICAZBALCETA, J. *Colección de documentos para la historia de México*, Tomo II. México: Antigua Librería, 1866; pp. 28-29. También conviene señalar que Geoffrey Parker fecha el 27 de julio de 1529 como el día en que el emperador marcha hacia Italia: «Por fin, el 27 de julio de 1529 Carlos subió a

Cortés recibirá los cargos de alguacil mayor y gobernador de manera vitalicia, pero no se menciona en ningún momento que vaya a recibir una compensación económica por el desempeño de los cargos. Del mismo modo, se le concederá la doceava parte de los beneficios, aunque parece que será en función de lo descubierto²².

Francisco Pizarro (*fig. 3*) recibió la capitulación ese mismo año de 1529, esta vez con fecha del 26 de julio, tres días después de que Cortés recibiese la suya. El documento entregado al trujillano daba buena cuenta de las hazañas de estos años previos, tiempo que había invertido en lanzarse al descubrimiento de nuevas tierras por el Mar del Sur.

«(...) puede haver cinco años, poco mas ó menos, que con licencia y parecer de Pedro Arias de Davila, Nuestro Gobernador y Capitan General que fué de la dicha Tierra-firme, tomastes á cargo de ir á conquistar, descubrir y pacificar é poblar por la costa del mar del Sur de la dicha tierra (...) y que con ellos y con el socorro que de navíos e gentes vos hizo el dicho capitán Diego de Almagro, partistes de la dicha Isla (del Gallo) y descubristes las tierras y provincias del Perú y ciudad de Tumbes»²³

Aquí puede apreciarse la labor de Pizarro tiempo antes de la capitulación, y poco después se confirma el deseo del extremeño de continuar con ese cometido. En esa parte es muy destacable cómo la Corona aclara que no contribuirá de ningún modo en la causa porque «queriades continuar la dicha conquista y poblacion á vuestra costa é mincion, sin que en ningún tiempo seamos obligados á vos pagar ni satisfazer los gastos»²⁴.

Pero si hay un aspecto interesante y realmente necesario a tratar aquí es el referido al poblamiento. En las capitulaciones se hace merced a los exploradores para que se establezcan en los territorios descubiertos, y más importante, se dan las pautas sobre cómo ha de hacerse. Porque no solamente basta con la creación de un lugar habitable, sino que ha de estar provisto de lo necesario para poder vivir allí. La capitulación de Pizarro lo muestra con mucha claridad, pues la extensión del documento no deja de lado ningún aspecto, haciendo imposible el incumplimiento de lo que allí se cita. Para este caso,

bordo de la galera real comandada por Andrea Doria y ese mismo día partió hacia Italia», en PARKER, G. *Carlos V. Una nueva vida del emperador*. Barcelona: Planeta, 2019; p. 241.

²² VAS MINGO, M. M. del. *op. cit.* p. 162.

²³ TORRES DE MENDOZA, *Colección de Documentos Inéditos del Archivo de Indias*, Tomo 22, p. 5; en ARANDA, R. *Colección de documentos sobre Perú*, Tomo I. Lima: Imprenta del Estado, 1890; p. 26.

²⁴ *Ídem*.

Pizarro contó con dos asociados: Diego de Almagro y Hernando de Luque, mencionados en la capitulación, e incluso aquellos que fueron conocidos como los *Trece de la Fama*²⁵.

«Doy licencia y facultad á vos el dicho capitán Francisco Pizarro, para que (...) podáis continuar el dicho descubrimiento, conquista y población de la dicha tierra y provincia del Perú, hasta doscientas leguas de tierra por la misma costa (...) por vos hacer merced, Prometemos de vos hacer Nuestro Governador é Capitan General de toda la dicha provincia (...) que al presente hay é adelante oviere en todas las dichas doscientas leguas, por todos los dias de vuestra vida, con salario de setecientos y veinte y cinco mil maravedís en cada un año (...) del qual salario, habeis de pagar en cada un año un Alcalde mayor, diez escuderos, treinta peones, un médico é un boticario, el qual salario os ha de ser pagado por los Nuestros oficiales de la dicha tierra»²⁶

Aquí se percibe lo antes comentado, y además puede verse cómo empieza a organizarse la administración del territorio, siendo Pizarro el encargado de establecer los cargos y pagar los salarios correspondientes. Además, se hace mención a «peones, un médico é un boticario», elementos necesarios para el establecimiento permanente, pues los primeros suponen la mano de obra para la construcción, y los segundos la asistencia médica necesaria para estos primeros momentos de poblamiento. Esto se ve reforzado (la parte concerniente a los peones) cuando unas pocas líneas después se da licencia para que «podais hacer en las dichas tierras y provincias del Perú, hasta quatro fortalezas»²⁷.

Los socios de Pizarro también consiguieron mediante la capitulación una buena serie de premios a la altura de la proeza. Hernando de Luque fue provisto del título de obispo de Tumbez, cargado con la labor de protector de todos los indios; Diego de Almagro consiguió el estatus de hidalgo, con todo lo que ello conllevaba, amén de la posesión de la fortaleza que hubiere en dicha ciudad²⁸.

Como puede apreciarse las capitulaciones concedieron a sus benefactores todo tipo de prebendas con un marcadísimo carácter señorial. No solamente serían los grandes

²⁵ Durante la estancia en la Isla del Gallo Pizarro fue obligado a abandonar la misión. En ese momento trazó una línea con su espada en la arena invitando a atravesarla a aquellos que quisiesen continuar junto a él. Estos que cruzaron la línea fueron los *Trece de la Fama*, y quienes continuaron al descubrimiento del Perú. Véase BALLESTEROS, M., BRAVO, C. Y LÓPEZ, L. E. "La conquista de Perú". *Cuadernos historia* 16, 1985 (52); 3-30, p. 8.

²⁶ ARANDA, R. *op. cit.* p. 27.

²⁷ *Idem.*

²⁸ «(...) Don Hernando de Luque, de le presentar á Nuestro muy Santo Padre, por Obispo de la ciudad de Tumbez (...) y entre tanto , que vienen las Bulas del dicho obispado, le facemos protector universal de todos los indios de la dicha provincia (...) Hacemos merced al dicho capitán Diego de Almagro de la tenencia de la fortaleza que hay ó oviese en la dicha ciudad de Tumbez (...) é le fazemos home-fijo-dalgo, para que goze de las honras é preeminencias que los homes fijo-dalgos pueden y deben gozar en todas las Indias, Islas é tierra firme del mar Oceano», *Idem.*

cargos de la administración, sino también los encargados de organizar el poblamiento tras la conquista con la facultad de otorgar tierras y solares a los colonos; también, en ocasiones, hacer repartimientos de indios²⁹. Por un lado, los capitulantes consiguieron el ascenso social que deseaban, pues siendo en su mayoría segundones, las Indias les dieron aquello de lo que no pudieron disfrutar por estar exentos de los mayorazgos en sus tierras de origen; por otro, los conquistadores legitimaron la presencia española en el territorio americano estableciendo las primeras poblaciones sancionadas por la Corona, consiguiendo así el marco jurídico sobre el que se establecería el futuro Derecho Indiano.

2.2. LAS BULAS ALEJANDRINAS

La empresa de Colón, motivada por la exigencia europea de productos (antes conseguidos del comercio con musulmanes e italianos), no requería del consentimiento de la Santa Sede, pues según el Derecho del momento cualquier descubrimiento de nuevas tierras quedaba automáticamente adscrito a los promotores del viaje si aquel que las había encontrado tomó posesión de ellas en nombre de estos³⁰. Pero, en cambio, los Reyes Católicos se interesaron por conseguir bulas que, por un lado, acreditaran su autoridad sobre los descubrimientos, y por otro, les otorgase el reconocimiento del papa. De este modo, Alejandro VI, que ya mantenía una estrecha relación con sus majestades por ser él quien avaló su matrimonio y quien les otorgó el título de “católicos”, les concedió una primera bula: la *Inter Caetera*, del 3 de mayo de 1493.

En dicho documento el papa Alejandro, enterado de la pretensión de los católicos monarcas de descubrir nuevas tierras más allá de Occidente con la intención de extender la fe católica, da el visto bueno a la misión. No son pocas las ocasiones en las que el Santísimo Padre recalca que la principal labor que han de acometer los monarcas de Castilla y Aragón es la de la profesión de la fe católica, y por supuesto, la enseñanza de esta a los habitantes autóctonos. De este modo, y llevando a cabo esta misión, el papa

²⁹ Esto es muy destacable. Desde la emisión de la Real Provisión de Granada, con fecha del 27 de noviembre de 1526, se estableció en todas las capitulaciones el buen tratamiento de los indios para prevenir de los posibles abusos: «(...) así sobre el castigo de lo pasado, como sobre el remedio de lo venidero, é escusar los dichos daños é inconvenientes, é dar orden que los descubrimientos poblaciones que de aquí adelante se hobieren de hacer, se hagan sin ofensa de Dios é sin muertes ni robos de los dichos indios, é sin cautivarlos por esclavos indebidamente». Tras esto, el documento continúa con los casos en los que será castigado todo aquel que abuse de los indígenas. Véase PACHECO, J. F., CÁRDENAS, F. Y TORRES DE MENDOZA, L. (dirs.) *Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y colonización de las posesiones españolas en América y Oceanía, sacados, en su mayor parte, del Real Archivo de Indias*, Tomo I. Madrid: Imprenta de M. Bernaldo de Quirós, 1864; p. 452.

³⁰ ORTEGA LÓPEZ, R. *Apuntes sobre la conquista española y la ocupación*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 1945; p. 65.

legítima el viaje y asigna a los reyes las tierras descubiertas, a excepción de aquellas bajo dominio de otros señores cristianos³¹.

Ya que poco tiempo antes los reyes habían tomado Granada, Alejandro VI otorgó estas bulas para que prosiguiesen con la labor evangelizadora, y al mismo tiempo, Isabel y Fernando consiguieron lo que ya poseían los portugueses: la bendición papal para la toma de posesión de las nuevas tierras. Y valiéndose del descubrimiento de «gente desnuda que no come carne y creen que en los cielos existe un Dios creador»³², la catequización de los mismos solo suponía un requisito menor para la concesión del documento, pues los monarcas ya habían sometido a los musulmanes y podían continuar con esta labor fuera de sus fronteras.

La bula *Eximiae Devotionis*, promulgada el mismo día que la anterior, ya no solo da licencia a los Reyes Católicos para extender el catolicismo por las Indias, sino que ahora les favorece en la «propagación del imperio cristiano»³³ y especifica cómo, al igual que a los reyes de Portugal, se les conceden «rescriptos e indultos»³⁴. En general, además de añadir que se les conceden las tierras descubiertas tanto por ellos como por otros en su nombre, se menciona en todo momento la concesión de la bula por razón de haberla dado también a los portugueses, así como los títulos que estos tendrían en sus tierras. Se trata de una bula de privilegios, que convierte a los Reyes Católicos en administradores de los bienes de la Iglesia en las Indias³⁵.

³¹ «Hemos sabido ciertamente, como vosotros, que desde hace tiempo os habíais propuesto buscar y descubrir algunas tierras e islas remotas y desconocidas, no descubiertas hasta ahora por nadie, con el fin de reducir sus habitantes y moradores al culto de nuestro Redentor y a la profesión de la Fe Católica (...) confiándose en que si se instruyeran, fácilmente se introduciría en dichas islas tierras el nombre de Nuestro Salvador y Señor Jesucristo (...) Nos, alabando mucho en el Señor ese vuestro santo y loable propósito, y deseando que sea llevado a su debida finalidad, de que el nombre de nuestro Salvador sea introducido en aquellas regiones, os rogamus insistentemente en el Señor y afectuosamente os requerimos (...) con ánimo y celo ferviente hacia la fe ortodoxa, queráis y debáis conducir a los pueblos que viven en tales islas a recibir la profesión católica (...) Y para que más libre y valerosamente aceptéis el encargo de tan fundamental empresa, concedido liberalmente por la Gracia Apostólica (...) a vosotros y a vuestros herederos y sucesores los Reyes de Castilla y León, para siempre por autoridad apostólica según el tenor de las presentes, donamos, concedemos y asignamos todas y cada una de las tierras e islas supradichas (...) que no se hallen sujetas al dominio actual de algunos Señores cristianos», recogido en MORALES PADRÓN, F. «Teoría y leyes...» *op. cit.* p. 167-174.

³² BEJARANO ALMADA, M. L. «Las Bulas Alejandrinas: detonantes de la evangelización en el Nuevo Mundo», *Revista de El Colegio de San Luis*, Nueva época, 2016 (12); 224-257, p. 237.

³³ MORALES PADRÓN, F. «Teoría y leyes...» *op. cit.* p. 168.

³⁴ *Ibidem*, p. 177.

³⁵ BEJARANO ALMADA, M. L. *op. cit.* p. 239.

La siguiente bula *Inter Caetera*, con fecha del 4 de mayo, establece hasta dónde llegarán las posesiones españolas para evitar conflictos con los portugueses, indicándose por primera vez la línea divisoria que separará unas de otras³⁶.

En esta se menciona a los lusos únicamente en dos ocasiones: la primera, y de forma directa, para que se respeten las posesiones de estos en «las regiones de Africa, Guinea y Mina de Oro otras islas, igualmente por apostólica concesión»³⁷; la segunda, de forma indirecta al referirse a las tierras que se excluyen de la donación, siendo estas las «que por otro Rey cristiano no fuesen actualmente poseídas hasta el día del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo próximo»³⁸.

Una última bula fue dictada: la *Dudum Siquidem*, del 26 de septiembre, y que sirvió para ampliar la donación realizada anteriormente, haciendo que los portugueses perdiesen la oportunidad de intervenir en los nuevos descubrimientos. Como apunta muy acertadamente Bejarano Almada, «es probable que en la solicitud de esta bula estuviera involucrado Colón, quien creía haber llegado a las Indias orientales»³⁹, sobre todo porque el documento reza:

«Nos, deseoso también de proseguir en vuestro favor graciosamente, con iguales «motu», conocimiento y plenitud de poder, de igual modo ampliamos la donación, concesión, asignación y las dichas letras con todas y cada una de las cláusulas en ellas contenidas por el tenor de las presentes a todas y cada una de las islas y tierras firmes halladas o por hallar, descubiertas o por descubrir que estén, o fuesen o apareciesen a los que navegan o marchan hacia occidente y aun el mediodía, bien se hallen tanto en las regiones occidentales como en las orientales y existan en la India»⁴⁰

Con estos cuatro documentos⁴¹ los Reyes Católicos podían continuar con la exploración de América, pues habían conseguido el permiso y bendición de la máxima autoridad sobre la Tierra. El papa, como delegado de Dios, y con capacidad para hacer y deshacer, convierte a los monarcas españoles en encargados de extender el catolicismo

³⁶ «según el tenor de las presentes, donamos, concedemos y asignamos, todas las islas y tierras firmes descubiertas y por descubrir, halladas y por hallar hacia el Occidente y Mediodía, fabricando y construyendo una línea del Polo Ártico que es el Septentrión, hasta el Polo Antártico, que es el Mediodía (...) la cual línea diste de las islas que vulgarmente llaman Azores y Cabo Verde cien leguas hacia el Occidente y Mediodía», recogido en MORALES PADRÓN, F. «Teoría y leyes...» *op. cit.* p. 173.

³⁷ *Ibidem*, p. 176.

³⁸ *Ibidem*, p. 173.

³⁹ BEJARANO ALMADA, M. L. *op. cit.* p. 241.

⁴⁰ MORALES PADRÓN, F. «Teoría y leyes...» *op. cit.* p. 168.

⁴¹ Convendría apuntar que estos no fueron los únicos documentos promulgados por el papa en beneficio de Isabel y Fernando, pero son los fundamentales para la exploración y toma de posesión de las tierras americanas durante los años de navegación y descubrimiento de Colón.

por las tierras creadas por el Salvador, por lo que la mayor fuente de derecho del momento está de su lado. Esto no evitará el cuestionamiento de la expansión por América, tanto en el momento en que estaba sucediendo como tiempo después con la problemática de los *justos títulos* y las tesis de Francisco de Vitoria⁴².

2.3.EL DERECHO CASTELLANO

Las Indias quedaron unidas de forma inmediata a la Corona de Castilla, y del mismo modo, a su jurisdicción, quedando bajo el amparo del antiguo derecho medieval castellano, pero pronto supuso un fracaso. Durante el establecimiento en las Antillas del primer lustro, la aplicación del derecho castellano no encontrará el efecto deseado, ya que no pudo solventar los múltiples problemas generados por los encargados del gobierno de las dichas tierras, así como la reducción de la población indígena, lo que provocará el desarrollo de nuevas normas y leyes de marcado particularismo. Probablemente, el fracaso fue producido porque en la propia metrópoli, que comenzaba a dar los primeros pasos en la modernidad, se estaba superando el anticuado sistema jurídico medieval, y su transporte a las Indias no podía asegurar efectividad cuando aquellos territorios fueron tomados sin «reconocer a los indígenas de las islas personalidad jurídica alguna, ni tampoco derecho de propiedad»⁴³.

El derecho castellano no es otra cosa que la superposición de aquellos elementos que influyeron en su composición a través del tiempo hasta la formación y afianzamiento del Estado de derecho. Las costumbres celtíberas fueron superadas por el derecho romano, y tras seis siglos de ocupación se añadió el componente germánico de los visigodos — cuya legislación pervivió gracias al *Liber Iudiciorum* —. Con la llegada de los musulmanes se produjo lo que la historiografía llamó “dispersión normativa”, un período donde «coexistieron en la península ibérica diversos ordenamientos o estatutos jurídicos»⁴⁴; pero entre el siglo XII y el XV comenzó a penetrar en España el derecho romano bizantino unido al derecho canónico, que venía formándose desde principios de la era cristiana, consiguiéndose así un marco jurídico propio de las incipientes monarquías

⁴² El dominico cuestionará, entre otros asuntos, la autoridad con la que los españoles se encontraban en las Indias. Según este, ni el papa ni el emperador poseían la autoridad universal. El primero no la ostentaba porque los indígenas no eran cristianos, por lo que escapaban a su dominio; el segundo, porque la unidad del imperio se regía por el *Ius commune*, y España, dada la fragmentación de la misma, no lo aceptaba. En BURILLO, J. “Francisco de Vitoria: los títulos legítimos a las Indias”. *Glossae. Revista de Historia del Derecho Europeo*, 1998 (1); 166-177, pp. 170-171.

⁴³ BERNAL, B. “Las características...”, p. 664.

⁴⁴ BERNAL, B. “El derecho castellano dentro del sistema jurídico indiano”, *Anuario Mexicano de Historia del Derecho*, 1998 (10); 89-105, p. 92.

absolutas europeas. La introducción de este nuevo derecho, unido a la tradición acumulada durante siglos en España, produjo conflictos de intereses, pero los reyes cristianos llevaron a cabo una enorme labor recopiladora, y fue así como surgieron el Fuero Juzgo, y posteriormente, el Fuero Real, en un intento por acabar con el «localismo jurídico existente hasta entonces»⁴⁵.

A pesar de los esfuerzos de monarcas como Fernando III y Alfonso X, y de grandes codificaciones de un talante extraordinario como las *Siete Partidas*, hubo de promulgarse el Ordenamiento de Alcalá (1348) en un intento por superar los conflictos surgidos de la aplicación del derecho. Esta nueva recopilación estableció el orden de prelación de leyes, esto es, la jerarquización de las fuentes, consiguiendo la primacía del «ordenamiento territorial sobre el local al establecer que los pleitos civiles y criminales se juzguen por el propio ordenamiento, que se promulgó como general para todo el reino»⁴⁶.

En cambio, aunque para Castilla las *Partidas* habían quedado en el último lugar de la jerarquía, siempre tuvieron una enorme aplicación, y fue sobre todo en las Indias, y especialmente en la Nueva España, donde tuvieron una fuerte influencia por no tener que enfrentarse al centralismo de la Corona ni existir ningún tipo de prebendas o fueros que defender.

En última instancia, fueron los Reyes Católicos quienes sancionaron el orden de prelación del Ordenamiento a pesar de que las propias Leyes de Toro (1505) — que fueron el medio por el que realizar esta acción — relegaron a este en la jerarquía establecida, pasando a ocupar el primer puesto de la normativa castellana⁴⁷.

El derecho castellano fue modificando el orden de prelación conforme avanzaron los años, e incluso los siglos, pero la base para las Indias había quedado marcada por el

⁴⁵ *Ibidem*, p. 94. «El sistema visigótico domina en el reino de León en el de Toledo, en el de Córdoba, en el de Sevilla y en el de Murcia; el Derecho libre, en la comarca de Burgos y parte de la Rioja; el de los Fueros breves, en Galicia, Asturias y parte de Castilla la Vieja; el de los Fueros extensos, en la Extremadura castellana, provincia de Cuenca y reino de Jaén» en GARCÍA GALLO, A. *Manual de Historia del Derecho español. El origen y la evolución del Derecho*, Tomo I. Madrid: Artes Gráficas y Ediciones, 1982; p. 392.

⁴⁶ BERNAL, B. “El derecho castellano...”, p. 96. «en este nuestro libro mandamos que se libren primeramente todos los pleytos ceviles, è creminales; è los pleytos, è contiendas que se non pudieren librar por las Leys deste nuestro libro, è por los dichos fueros, mandamos que se libren por las Leys contenidas en los Libros de las siete Partidas», recogido en JORDAN DE ASSO Y DEL RIO, I. y MANUEL Y RODRÍGUEZ, M. de. *El ordenamiento de leyes, que D. Alfonso XI hizo en las Cortes de Alcalá de Henares el año de mil trescientos cuarenta y ocho*. Madrid: Imprenta de Don Alejandro Gómez Fuentenebro, 1847; p. 61.

⁴⁷ BERNAL, B. “El derecho castellano...”, p. 98.

crisol de legislaciones, costumbres y principios que se habían ido desarrollando durante más de un milenio en la Península Ibérica. De esta forma, un marco jurídico de proporciones descomunales fue implantado en la América colonial creando confusión cuando la variedad geográfica se presentó ante los gobernadores, y haciendo que los juristas españoles e indianos hubiesen de esforzarse por encontrar la conciliación entre la ley de Castilla — que se «trasplantó íntegramente al Nuevo Mundo»⁴⁸ — y la variedad local indígena en los más diversos ámbitos.

2.4.LA COSTUMBRE INDÍGENA

En tan vastos territorios lo común fue encontrar una variedad realmente grande de lenguas, gentes, relaciones y costumbres, algo que requirió de la fusión entre el derecho castellano y las antiguas leyes indígenas. Estas actuaron allí donde las leyes de Castilla no podían obrar por tratarse de casos particularmente singulares⁴⁹, y que respondían a las peculiaridades de las variantes regionales, municipales o locales.

«Ordenamos y mandamos, que las leyes y buenas costumbres, que antiguamente tenían los Indios para su buen gobierno y policía, y sus usos y costumbres observadas y guardadas despues que son Christianos, y que no se encuentran con nuestra Sagrada Religion, ni con las leyes de este libro, y las que han hecho y ordenado de nuevo se guarden y executen; y siendo necesario, por la presente las aprobamos y confirmamos, con tanto, que Nos podamos añadir lo que fuéremos servido, y nos pareciere que conviene al servicio de Dios nuestro Señor, y al nuestro, y á la conservación y policía christiana de los naturales de aquellas Provincias, no perjudicando á lo que tienen hecho, ni á las buenas y justas costumbres y estatutos suyos»⁵⁰

Parece evidente que el único requisito que hubo en el marco de la aceptación y asunción de las leyes de los autóctonos fue que estas no contraviniesen los preceptos de la religión y las leyes castellanas, y tanto fue así, que se barajó la posibilidad de que muchas de ellas sirviesen de aplicación en España por cuanto las castellanas no resultaban justas o no encontraban aplicación en determinados asuntos⁵¹. Pero el hecho de asumir

⁴⁸ GARCÍA GALLO, A. “El derecho común ante el Nuevo Mundo”, *Revista de estudios políticos*, 1955 (80); 138-155, p. 133.

⁴⁹ «Que se guarden las leyes de Castilla en lo que no estuviere decidido por las de las Indias», en *Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias*, Tomo I, Libro II, Título I, Ley II. Madrid: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 1998; p. 218.

⁵⁰ *Ibidem*, Ley III.

⁵¹ MARILUZ URQUIJO, J. M. “El derecho prehispánico y el derecho indiano como modelos del derecho castellano”, *Actas y Estudios del III Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Internacional*. Madrid: Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 1973; 101-113, p. 102. La autora también muestra unas palabras de Francisco Hernández sobre esto mismo para ejemplificar como algunas de las leyes eran de un marcado carácter superior a las de Castilla: «había lugares donde la fortuna paterna pertenecía indistintamente a los hijos y dividida en partes iguales era distribuida entre todos», haciendo referencia a la inexistencia de un sistema parecido al del mayorazgo; p. 106. Y en otro momento cita a Hervás y Panduro, que concluyó sobre los Incas: «no hallamos en las naciones antiguas (menos en las

leyes indígenas y concederles el derecho de poseer un estatuto jurídico a sus afectados provocó posturas encontradas. De un lado, los detractores, que consideraban estas como bárbaras o tiránicas; de otro, los que las calificaban como buenas para los indios; y por último, aquellos que pensaron que no solamente serían beneficiosas para los indígenas, sino también «buenas en sí, ya que se encuadraban perfectamente dentro de los principios inmutables del Derecho Natural y tendían a lograr un orden de justicia»⁵².

De algún modo se produjo la burocratización de un sistema que carecía de procedimientos escritos, ya que «los indígenas, en la solución de sus pleitos civiles y mercantiles, huyen de los procedimientos occidentales, por lo que muchas actuaciones jurídicas no se registran por escrito»⁵³. De esto se desprende la clara intención de integrar a los indígenas en el sistema colonial, y aún más, en el castellano, llevando a cabo la asimilación, por una parte y la más importante, religiosa, y por otra, la cultural. Porque «si los indios habían sido felices con tales leyes, nada más natural por su restauración integral, solo depurada de aquellas normas impregnadas de las idolatrías prehispánicas»⁵⁴. Pero esto no podía realizarse precipitadamente, sino que debía ocurrir de forma progresiva «hasta conocer muy bien las condiciones y costumbres de los naturales de la tierra que en ella habitan, que como es larga, son diversas las costumbres»⁵⁵, y sobre todo, haber sido instruidos primero en la fe católica.

La costumbre aseguraba un elemento moderador «de los posibles excesos del legislador»⁵⁶ en un momento en que en Europa este elemento comenzaba a decaer frente a los nuevos sistemas jurídicos. Además, otorgaba a los indígenas unas normas propias y exclusivas que rigiesen sus comunidades y les favoreciesen en los pleitos, a pesar de que en algunos aspectos quedase limitado por imposición del derecho castellano. La incorporación no fue fácil, y los levantamientos indígenas se extendieron hasta el siglo XIX, pero acostumbraron a colaborar en el esfuerzo por integrarlos en el sistema colonial,

modernas, exceptuando la China) el cuidado y la legislación tan acertada de los Incas para que hasta el más infeliz súbdito fuese útil a la sociedad y gozase de sus beneficiosas providencias», p. 108.

⁵² *Ibidem*, pp. 102-104.

⁵³ CHUNGA HIDALGO, L. “Las comunidades de indios en el derecho indiano”. *Revista jurídica online*, 2009 (26); 359-372, p. 360. Disponible en <http://cort.as/-NMOt> (Consultado: 12/07/2019)

⁵⁴ MARILUZ URQUIJO, J. M. *op. cit.* p. 105.

⁵⁵ CHUNGA HIDALGO, L. *op. cit.* p. 361, citando a Matienzo, oidor de la Audiencia de Charcas, y citado por VALCARCEL, *Historia del Perú Antiguo...* T. 2, p. 185.

⁵⁶ SUÁREZ, F. “La costumbre indígena en el derecho indiano”. *Anuario de la Facultad de Derecho*, 1995-1996 (5); 119-152, p. 126.

y su contribución «a la consolidación del sistema y la posterior incorporación al mismo ha sido notable»⁵⁷.

«Que en efeto, como dixo bien un Politico, no menos diferentes suelen ser las costumbres de cada región, que los aires que las baña(n) i los terminos que las dividen»⁵⁸

Las costumbres tendrán validez, sean anteriores al señorío de Castilla o a la conversión de los indígenas al cristianismo, sean de nueva creación, y podrán encontrarse instituciones que lleguen a regirse únicamente por estas. En el caso de que la costumbre sea inexistente, se recurre a la del lugar más cercano, como recoge Hevia Bolaños en la *Curia Filípica*:

«Y haviendo dos costumbres, vale la mas moderada; y no la haviendo en el Lugar, se ha de guardar la de la tierra mas cercana, conforme una Ley de Partida»⁵⁹

Las antiguas leyes de los indígenas tuvieron un peso muy notable en la legislación indiana, especialmente si se tiene en cuenta que serían determinantes en el gobierno de estos, y sobre todo, en los pleitos producidos entre sus homólogos y españoles — en particular, en aquellos que atentasen contra el derecho consuetudinario indio. Esta se presenta como el equivalente de los fueros castellanos, otorgando a cada región una legislación de características propias que se superpone a las leyes castellanas o se supedita a estas en función de la fuerza de unas u otras en cuanto a la aplicación. De este modo, se conseguirá, en cierta medida, un sistema más justo para con los indígenas, que ahora gozan de un estatuto jurídico propio.

3. LA CODIFICACIÓN DEL DERECHO INDIANO

«Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre aquestos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas dellas, con muerte y estragos nunca oídos habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin dalles de comer ni curallos en sus enfermedades en que, de los excesivos trabajos que les dais, incurren y se os mueren y, por mejor decir, los matáis por sacar y adquirir oro cada día? ¿Y qué cuidado tenéis de quien los doctrine y cognozcán a su Dios y criador, sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos? ¿Éstos, no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amalos como a vosotros mismos? ¿Esto

⁵⁷ GRENNI, H. “El lugar del indio en el Derecho Indiano”. *Teoría y Praxis*, 2008 (12); s.pp.

⁵⁸ SOLÓRZANO PEREIRA, J. de. *op. cit.* Tomo I, Libro II, Cap. XXV; p. 211. Disponible en: <http://cort.as/-MZK6> (Consultado: 12/07/2019).

⁵⁹ HEVIA BOLAÑOS, J. de. *Curia Philipica*, Primera parte; p. 45. Disponible en: <http://cort.as/-NVSr> (Consultado: 13/07/2019)

no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño tan letárgico dormidos? Tened por cierto, que en el estado que estáis no os podéis más salvar que los moros o turcos que carecen y no quieren la fe de Jesucristo»⁶⁰

Estas fueron, según Bartolomé de Las Casas, las palabras que el dominico Antonio de Montesinos pronunció en La Española el cuarto domingo de Adviento de 1511. Las mismas palabras que dieron comienzo a la amplia legislación que durante más de tres siglos estuvo formándose para paliar y conferir a aquellos *desgraciados* una vida mejor.

Los continuos repartimientos, el trato vejatorio y el excesivo trabajo forzado desde el mismo momento de la llegada de Colón, condujeron a fray Antonio de Montesinos, que había sido testigo de primera mano, a levantar la voz contra los delegados del monarca en territorio indiano. No hablaba únicamente por sí mismo, sino que ponía al descubierto las voces de otros tantos dominicos que se quejaban de esto, además de amenazar a los partícipes de aquellos actos con la pérdida de la salvación.

Montesinos fue enviado a España por alterar el orden en la isla, pero el católico monarca Fernando comprendió la situación⁶¹. Una junta de juristas y teólogos determinó la elaboración de unas primeras leyes que actuasen en favor de los indígenas durante el proceso de conquista y pacificación de los territorios americanos. Estas *Leyes de Burgos* de 1512 son fruto de las conclusiones a las que llegó la junta de Fernando el Católico, siendo las siguientes:

1. Los indios son libres y como tales deben ser tratados (Conclusión 1ª).
2. Los indios deben ser instruidos en la fe católica y en ello debe ponerse toda la diligencia necesaria (Conclusión 2ª).
3. A los indios se les debe dotar de casa y hacienda propia a criterio de las autoridades locales. Lógicamente se les debe dar tiempo para que labren y conserven esa hacienda “a su manera” (Conclusión 5ª).

⁶⁰ GUTIÉRREZ, G. “Texto del sermón de Antón Montesino según Bartolomé de Las Casas y comentario de Gustavo Gutierrez”. *Conmemoración de los 500 años del Sermón de Antón Montesino y la primera comunidad de dominicos en América*, 21 diciembre 1511 – 2011; pp. 6-7. En versión digital disponible en <http://cort.as/-PnJS> (Consultado: 23/07/2019)

⁶¹ Hay que destacar que la primera reacción del monarca, y por la cual Montesinos volvió a España, fue la de acallar a estos: «“para sosegar al pueblo” (los colonos españoles) y evitar que a los indios se les ocurra pensar que las ideas subversivas que los frailes propalan son correctas, los consejeros han discurrido un remedio eficaz. A tal efecto se ordena a D. Diego Colón que luego — in mediatamente — los meta a todos en un barco y los envíe a España, adonde su superior (al que, de paso, se instruye) para que den razón de por qué han hecho tan gran novedad tan sin fundamento y aquel, como es razón (ya se ha decidido que son culpables) los castigue muy severamente.», en PIZARRO ZELAYA, A. “Leyes de Burgos: 500 años”. *Diálogos: Revista de Historia*, 2013, vol. 14 (1); 31-78, p. 39.

4. La convivencia – ‘comunicación’ – entre cristianos e indígenas es medio idóneo para la evangelización de los últimos. [La tesis del ‘buen ejemplo’]. (Conclusión 6ª).
5. Los indios pueden ser obligados a trabajar para los cristianos ‘por razón de señorío y servicio’ que deben al rey de España a cambio de ‘mantenerlos en justicia (sic) y evangelizarlos’ (Conclusión 3ª).
6. El trabajo debe ser tal que no impida la evangelización; asimismo que sea en provecho suyo y de la república (Conclusión 3ª).
7. Las obligaciones laborales que se impongan a los indios deben ser tolerables (‘que las puedan sufrir’) y deben combinarse con descanso conveniente, diario y anual (Conclusión 4ª).
8. A cambio de su trabajo los indios deben recibir un salario apropiado en dinero y especie (Conclusión 7ª).⁶²

Viendo el carácter de las mismas ya se puede intuir cuál iba a ser la intención de la Monarquía: la defensa de sus nuevos vasallos en el Nuevo Mundo. Y ahondando en estas mismas leyes, al año siguiente se publicó una enmienda en las conocidas *Leyes de Valladolid*, en las cuales se establecía el Requerimiento. Esto no era más el paso previo al sometimiento de los indígenas. Un texto que explicaba a los autóctonos el porqué de su sumisión, y por qué habían de aceptar la autoridad de los monarcas españoles.

Los años fueron pasando y el horizonte geográfico avanzó al tiempo que continuaba la conquista. Desde 1513 a 1526 se habían fundado ciudades, se había dado inicio a la vuelta al mundo, se había iniciado la conquista de México, se había proyectado el avance hacia el sur, y entre otras, el Consejo de Indias había sido creado, y Pizarro había comenzado su viaje al Perú⁶³. También durante este tiempo había llegado al trono un nuevo monarca en Castilla, el cual parecía haber sido “puesto al día” sobre las fechorías de los que marcharon al Nuevo Mundo, porque a pesar de las *Leyes de Burgos* seguían cometándose atrocidades. Fue de este modo como se lanzaron las *Ordenanzas sobre el buen tratamiento a los indios y manera de hacer nuevas conquistas* en 1526, ya que el emperador «decidió suspender la conquista, en tanto se volvía a discutir y tratar “como de aquí en adelante se hubiera de hacer”»⁶⁴. Estas nuevas normas habrían de

⁶² *Ibidem*, p. 40.

⁶³ MORALES PADRÓN, F. “Teoría y leyes...” *op. cit.* p. 369.

⁶⁴ *Ibidem*, p. 370.

utilizar a los eclesiásticos como muro de contención entre los conquistadores y los indios para evitar mayores desgracias, y de forma sintética, doce son las normas esenciales que perdurarán hasta la década de los 40: castigo a quienes cometa crímenes contra los indios, liberación de todo indio esclavizado injustamente, acompañamiento de las misiones con clérigos para el adoctrinamiento de los naturales, buen trato de estos por parte de los eclesiásticos, lectura del Requerimiento antes de la conquista, consenso entre capitán y el resto de misioneros antes de actuar, estudio previo del lugar en que levantar una fortaleza sin que genere perjuicio de otros, rescates realizados de forma no violenta, prohibición de hacer esclavos, no dar demasiada carga de trabajo a los indígenas y encomendarlos como personas libres, y alistamiento de las tropas en España para evitar el despoblamiento⁶⁵.

De nuevo, y ya habiendo llegado a mediados del XVI, los desmanes seguían cometiéndose, y esta vez las quejas llegaban de otro dominico, el mismo que dio testimonio de las palabras de Montesinos: Bartolomé de Las Casas (*fig. 5*). Este fraile había sido encomendero, pero la conciencia parecía no dejarle tranquilo por no avisar de lo que allí sucedía, así que puso todo su empeño en las palabras escogidas a la hora de escribir su *Brevísima relación de la destrucción de las Indias*, obra con la que se presentó en la corte de Carlos V. A lo que aquí se contaba había que añadirle la corrupción en el Consejo de Indias, donde sus integrantes parecían obrar de forma poco ortodoxa, los mismos que rápidamente fueron apartados de sus cargos o multados⁶⁶.

Una junta analizó las palabras de Las Casas, y el emperador validó la decisión, por lo que los días 20 de noviembre de 1542 y 4 de junio de 1545 se expidieron desde Barcelona y Valladolid las *Leyes Nuevas*. Con forma de Reales Provisiones, esta nueva legislación intentó solucionar — de nuevo — los problemas existentes, y especialmente

⁶⁵«1. Serán castigados los capitanes que cometa tropelías con los indios. 2. Todo indio esclavizado injustamente será liberado, devuelto a su tierra y tratado como hombre libre. 3. Toda expedición llevará dos clérigos o religiosos para adoctrinar a los naturales “conforme a la bula de concesión” 4. Los clérigos cuidarán que se dé buen trato a los indios. 5. Lo más importante y primero a realizar cuando se llegue a algún sitio es leerle a los indígenas el Requerimiento “una y dos y más veces cuantas parecieren a los clérigos”. 6. El capitán siempre tomará el parecer de oficiales y clérigos antes de actuar. 7. Conviene estudiar si interesa levantar alguna fortaleza y casas para vivir, escogiendo el mejor sitio, sin dañar, herir ni matar. 8. Los rescates se harán por las buenas, sin forzar y sin tomar nada por las fuerzas. 9. Queda prohibido hacer esclavos. 10. Los indígenas no pueden ser compelidos a trabajar en minas, pesquerías o granjerías. Si acceden se procurará no darles demasiada tarea, procurando civilizarlos. 11. Para mejor civilización se les encomendará como a personas libres y según los indiquen oficiales y clérigos. 12. Las tropas serán alistadas en España, pues en Indias se están despoblando algunas zonas al reclamo de las conquistas continentales.» *Ibidem*, p. 372.

⁶⁶ *Ibidem*, p. 422.

los referidos a las encomiendas y repartimientos. Así, en líneas generales, los temas tratados hacían referencia a la reforma de la administración de Indias, tanto de su órgano fundamental (el Consejo) como de los sistemas de encomiendas y el sistema tributario, así como el trato a los indígenas y la forma en que realizar los descubrimientos⁶⁷.

Estos temas fueron tratados en un total de 45 leyes, y esta vez el monarca ordenó que fuesen impresas y divulgadas por las Indias, a fin de que estas fuesen leídas a los indígenas para que conociesen su situación frente a una legislación que buscaba de nuevo su amparo⁶⁸.

Durante los posteriores años se promulgaron diversas ordenanzas sobre los métodos de poblamiento y la forma en que habían de llevarse los descubrimientos, pero fue el cronista López de Velasco quien comenzó, a petición del Consejo de Indias, con la recopilación de las disposiciones promulgadas entre 1492 y 1569 en un orden semejante al de las *Partidas*. La *Copulata de Leyes y Provisiones de Indias*, como se conoció a la obra, nunca fue publicada y sirvió para uso del Consejo⁶⁹.

Juan de Ovando, que presidió el Consejo de Indias, comenzó con la redacción de su propia compilación, el denominado *Código Ovandino*, el cual nunca llegó a concluir. Entre 1570 y 1575 consiguió terminar uno de los libros que compondrían la recopilación, la cual estaría formada por siete, y parte de otros dos: *De la gobernación espiritual*, *De la gobernación temporal* y *De los indios*. Las partes que había conseguido redactar fueron promulgándose como Ordenanzas entre 1571 y 1575, al menos los referentes al Consejo de Indias, los de descubrimientos, poblaciones y pacificaciones, y los de Patronato Real⁷⁰.

En los siguientes años se continuó con la labor recopiladora, como fue el caso del *Cedulario de Encinas*, empero, otra de las grandes obras, y de mayor relevancia, fue la que el hombre de letras Juan de Solórzano Pereira proyectó a principios del XVII. Siendo este oidor de la Audiencia de Lima recibió el encargo del Consejo de Indias para elaborar un texto recopilatorio de las disposiciones dirigidas al territorio americano, labor que aceptó y que para 1622 tenía publicado ya el texto del *Libro I de la Recopilación de las*

⁶⁷ Morales Padrón lo enumera de la siguiente forma: «1. Reorganización del Consejo de Indias. 2. Reorganización administrativa de las Indias. 3. Trato a los indígenas. 4. Reforma del sistema de encomiendas. 5. Nuevas disposiciones para realizar descubrimientos. 6. Reforma del sistema tributario.» *Ibidem*, p. 424.

⁶⁸ *Ibidem*, p. 425.

⁶⁹ ANDRÉS SANTOS, F. J. “Los proyectos de recopilación del derecho indiano en época de Felipe IV”. *AFDUDC*, 2007 (11); 45-69, p. 51.

⁷⁰ *Ídem*.

Cédulas, Cartas, Provisiones y Ordenanzas Reales. El proyecto se completaría con seis libros de 102 títulos, pero según los estudios de Manzano Solórzano «abandonó definitivamente sus proyectos particulares por sus muchas ocupaciones en el Perú y con el fin de concentrarse en la composición de su tratado *De Indiarum iure*»⁷¹.

Tras esto, se darán, entre otros, los proyectos de Aguiar y Acuña en 1628 (*Sumarios de la Recopilación General de Leyes de Indias*) y de León Pinelo en 1635 (*Recopilación de leyes, provisiones, cédulas y ordenanzas de las Indias Occidentales, Islas y Tierra Firme del Mar Océano*), pero será el de 1680 el definitivo. Fernando Paniagua será el encargado de asumir el trabajo de elaborar la recopilación para Carlos II, la cual llevará integrada las arduas tareas de los anteriores recopiladores, por lo que en suma, finalmente las tareas de todos los anteriores se vieron incorporadas y llegaron a promulgarse⁷².

Grandes fueron los esfuerzos por legislar para encontrar una solución a la *cuestión de las Indias*, y si bien no fue casi hasta esta recopilación cuando la situación mejoró, no fue por falta de intentos.

4. LA FORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DE JUSTICIA

Después de la llegada a América, y durante el período de conquista, no se permitió la entrada de abogados, procuradores, u otro tipo de administradores de justicia o funcionarios relacionados con ella — profesionales del oficio, se entiende —, pues prefirió dejarse en manos de expedicionarios que llevaban consigo títulos que les capacitaban para estas labores, y así acortar los procesos judiciales⁷³. Pero a medida que el proceso de colonización avanzó y la población comenzó a aumentar, y consecuentemente, el número de pleitos, fue necesario establecer organismos de poder que pudiesen hacer frente a las demandas de los habitantes. De este modo, el poder en las Indias se vería equilibrado por tres instituciones: el Consejo de Indias, el virrey y las

⁷¹ *Ibidem*, pp. 57 y 63.

⁷² Como señala Grenni: «Esta Recopilación se dividió en 9 libros que tratan las siguientes materias: cuestiones religiosas; sobre el Consejo y Junta de Guerra de indias, sobre las Audiencias, Cancillerías, Juzgados, Orden de prelación de legislación, etc.; sobre los Virreyes, Capitanes Generales, etc.; sobre descubrimientos y minas; sobre los Cabildos; sobre los Corregidores, Alcaldes y Pleitos; sobre los indios y las encomiendas; sobre los delitos y las penas; sobre los impuestos y contribuciones; y sobre la Casa de Contratación», en GRENNI, H. «Las Leyes de India: un intento por considerar a los indígenas como personas con derechos». *Teoría y Praxis*, s.f. (4); s.pp.

⁷³ Por ejemplo, Cortés consiguió el cargo de Justicia Mayor, lo que le confería la capacidad de administrar justicia sin ningún tipo de proceso judicial.

Reales Audiencias, siendo estas dos últimas los máximos órganos de apelación — en el territorio. Así, fueron trece las audiencias creadas a lo largo de los dos grandes virreinos americanos.

4.1.VIRREINATO DE LA NUEVA ESPAÑA

La primera de las audiencias formadas en el virreinato de Nueva España — que no será creado hasta 1535 — fue la de Santo Domingo, allá por 1511, cuando por Real Provisión del 5 de octubre la reina Juana establecía tres jueces de apelación; y un segundo documento, sus ordenanzas y funciones.

«Otrosý, hordeno y mando, que los dichos Juezes ayan de despachar e despachen las cartas executorias que dieren e otras cartas que son postrimeras en que se fenescen los pleytos e cabsas que ante ellos estouieren pendientes, por Don Fernando e Doña Juana, e que vayan selladas con nuestro sello, que mandaremos poner en las dichas Yndias»⁷⁴

Esta, instituida para actuar como contrapeso al poder de Diego Colón, se constituyó como el único organismo de apelación existente en las Indias durante los primeros años de la conquista, y fue subordinada al poder del Consejo de Indias tras su creación en 1524⁷⁵. Pero lo cierto es que realmente se constituyó años después como Audiencia, ya que como se ha mencionado, inicialmente se mantuvo como un juzgado de apelación, y que parecía tener múltiples problemas con el hijo del descubridor, que además ponía trabas a toda la labor de este organismo. Fue en 1520 cuando el tribunal pasó a tener la categoría de Audiencia y se le sumaron un mayor número de jueces, pero a pesar de esto, Diego Colón se resistía a reconocer la autoridad de la institución llegando a establecer su propia Audiencia en su casa⁷⁶. Después de muchos problemas con el Almirante, una Real Provisión estableció lo que había de hacerse frente al nuevo órgano, esto es, que se cumpliese todo lo dictado por el tribunal como si fuese mandado por la propia Corona⁷⁷

⁷⁴ GÓMEZ GÓMEZ, M. “La Cancillería Real en la Audiencia de Santo Domingo”. *Revista de Humanidades*, 2014 (22); 17-45, p. 24.

⁷⁵ MIGUEL Y ALONSO, C. de. “Las audiencias en los reinos y señoríos de las Indias”. *Cuadernos Hispanoamericanos*, 1959 (116-117); 189-204, p. 193.

⁷⁶ GÓMEZ GÓMEZ, M. *op. cit.* p. 29.

⁷⁷ «Sepades que no (sic) havemos mandado agora nuevamente proveer presidente en la nuestra Audiencia Real que reside en esa isla e se ha fecho para ello nuevas hordenanças y reformado de otras cosas que a nuestro seruicio y a la avtoridad de la dicha Avdiencia conviene, y porque a nuestro seruicio y bien desas partes cumple que todo lo que la dicha Avdiencia proveyere e hiziere se guarde, cunpla y obedezca en todo y por todo, como si nos lo mandásemos y proveyésemos, fue acordado que deuíamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razón, por la qual vos mandamos a todos e a cada vno de vos como dicho es, a quien esta nuestra carta o su traslado signado fuere mostrada e della supierdes en qualquier manera, que cada e quando por los dichos nuestros presidente e oidores fuerdes llamados e requeridos acudáis a ellos e

Poco tiempo después, ya en 1527, fue creada la Audiencia de México por el temor a que Cortés se excediese en su gobierno y por los conflictos surgidos entre este y algunos de los sometidos. Esta nueva Audiencia, de igual modo subordinada al Consejo de Indias, no contó con un presidente letrado en sus inicios, lo que provocó que el comienzo de su andadura en materia judicial no fuese especialmente reseñable. Ya en 1535, una vez formado el virreinato, el poder de Cortés quedó sometido al de la Audiencia, y por lo tanto, al del virrey, ya que era el presidente de la misma. La figura de este último quedaría en un segundo plano en la institución porque al no ser letrado, o lo que es lo mismo, no ser docto en leyes, no se le permitía nada más que firmar las resoluciones, siendo los oidores quienes llevarían la voz cantante en los juicios⁷⁸.

Esta Audiencia, y como pasará con la de Lima, tendrá la categoría de virreinal, que además de otorgarle la mayor importancia entre todas las existentes, permitía gobernar y llevar la administración de su jurisdicción en ausencia del virrey por cualesquiera causas⁷⁹. Así, ejercía el poder sobre un territorio muy amplio dividido por el istmo de Panamá, «de la misma manera que en España en principio se dividió el territorio de la Corona de Castilla en dos Audiencias, Valladolid y Granada, con la línea del río Tajo como divisoria»⁸⁰.

La Audiencia de México, siendo como era la más relevante del virreinato, tuvo no pocos problemas con las demás por cuestiones referentes a su jurisdicción, y perder una parte del territorio sobre el que ejercer el poder suponía un fracaso y el inicio de algún conflicto. Tal es lo que sucedió con la provincia de Colima entre las audiencias de México y Guadalajara. Durante mucho tiempo Colima se había mantenido bajo la jurisdicción de la Audiencia de México, pero la larga distancia entre ambas hacía inviable trasladar los pleitos hasta la capital del virreinato. Una cédula de Felipe II en 1574 trasladó Colima, Copala y Zacatula a la jurisdicción de la Audiencia de Guadalajara (Nueva Galicia), y «que los presidentes y oidores de las audiencias reales de Nueva España y Guatemala cumplieran esta disposición, de manera que si algún pleito de estas provincias llegaba a

hagáis y cumpláis todo lo que de nuestra parte vos dixeren e mandaren... e le déys todo vuestro favor e ayuda que vos pidieren e mandaren» en *ibidem*, p. 32.

⁷⁸ MIGUEL Y ALONSO, C. de. *op. cit.* p. 194.

⁷⁹ Como la estancia en otro lugar, fallecimiento, etc.

⁸⁰ *Ibidem*, p. 195.

ellas, debían remitirlas inmediatamente a la Nueva Galicia»⁸¹. Esto se produjo por petición de la propia Audiencia de Guadalajara, que argumentó que las poblaciones más cercanas a esta se encontraban bajo jurisdicción de la Audiencia de la capital del virreinato, y en la mayor parte de las ocasiones los vecinos no acudían a la apelación por encontrarse demasiado lejos.

Tras lo mencionado la Audiencia de México recurrió al recurso del “obedézcase pero no se cumpla”⁸², mientras la Audiencia de Guadalajara acataba la orden. Finalmente, la provincia de Colima no aceptó pertenecer a la jurisdicción novogallega, por lo que volvió a la novohispana, pero el conflicto perduró hasta el siglo XVIII. La localidad suponía un punto estratégico de frontera entre el territorio de Nueva España y Nueva Galicia, y la Audiencia novohispana no podía ceder ante su rival⁸³.

Posteriores a la de México serían las Audiencias de Guatemala, de 1543, y la de Guadalajara, de 1548, y con la que tuvo el conflicto en la década de los setenta. La primera llegó dada por las *Leyes Nuevas* de 1542, que dispusieron la creación de uno de estos organismos en «los confines de Guatemala y Nicaragua»⁸⁴, y cuya jurisdicción abarcaría las provincias de Guatemala, Chiapa, Yucatán, Cozumel, Higueras, cabo de Honduras, Nicaragua y Panamá.

4.2.VIRREINATO DEL PERÚ

La primera de estas instituciones en el gran territorio del virreinato del Perú (1542) fue la Audiencia de Panamá, creada en 1538 por la privilegiada posición de la ciudad — justamente localizada entre ambos virreinos. Una Real Cédula del 26 de febrero estableció el tribunal con una jurisdicción que abarcaba desde la Castilla del Oro hasta el puerto de Buenaventura, delimitada por las Audiencias de Nueva Granada, Quito y Guatemala⁸⁵

⁸¹ MACHUCA CHÁVEZ, C. P. “Colima entre las audiencias de México y la Nueva Galicia. Historia de un conflicto jurisdiccional”. En REYES, J. C. (ed.) *Memoria. IV Foro Colima y su Región. Arqueología, antropología e historia*. México: Gobierno del Estado de Colima, Secretaría de Cultura, 2008; p. 3.

⁸² Fórmula jurídica propia del derecho castellano basada en la aceptación de la norma y en la negación a su cumplimiento.

⁸³ *Ibidem*, pp. 3, 4 y 6.

⁸⁴ VALLEJO GARCÍA-HEVIA, J. M. *Estudios de Instituciones Hispano-Indianas*, Tomo I. Madrid: Imprenta Estatal Boletín Oficial del Estado, 2015; p. 34.

⁸⁵ «la provincia de Castilla del Oro, hasta Portobelo y su tierra, la ciudad de Natá y su tierra, la gobernación de Veragua, y por el mar del Sur, hacia el Perú, hasta el puerto de la Buenaventura exclusive: y desde Portobelo hacia Cartagena, hasta el río Darien, exclusive, con el golfo de Uraba y Tierra-Firme, partiendo términos por el Levante y Mediodía con las Audiencias de el Nuevo Reino de Granada y San Francisco de Quito: por el poniente con la de Santiago de Guatemala : y por el Septentrión y Mediodía con los dos mares del norte y del Sur» Citando a su vez a Sánchez-Arcilla. SANZ GARCÍA-MUÑOZ, M. A. “El sello y

En suma, las disposiciones fueron las mismas que para las Audiencias de México y Santo Domingo con algunas modificaciones, pero lo cierto es que la andadura del nuevo tribunal no fue demasiado larga. Uno de los oidores designados para el cargo desapareció sin dejar rastro antes de llegar a tomar posesión, y el Oidor decano fue objeto de tantos escándalos que se tomó la decisión de clausurar la Audiencia en 1542⁸⁶. De este modo, el tribunal de Panamá desapareció en favor de la Audiencia de Guatemala.

Para el año de 1563 la situación de la Audiencia de Guatemala, y con mayor concreción, de sus funciones, era bastante distendida. El territorio cubierto por esta no era especialmente amplio y la importancia de Panamá «como puerto de salida al tráfico del mar del Sur, había crecido de manera inesperada ya que el comercio entre España y el Perú pasaba por Panamá, generando los pertinentes asuntos administrativos y judiciales»⁸⁷. De esta forma, Felipe II ordenó en septiembre que la Real Audiencia de Guatemala recuperase su posición inicial en Panamá, y así se mantuvo hasta 1752.

La Audiencia de Lima (*fig. 6*), la siguiente en ser creada, y una de las más relevantes por ser de carácter virreinal, surgió de las *Leyes Nuevas* en 1542 y fue instaurada plenamente en 1544. Su jurisdicción se extendió «desde Paíta, Piura, Cajamarca, Chachapoyas, Moyobamba, los Motilones, el Collao y Chile»⁸⁸, y también poseyó el sello real, consiguiendo los mismos derechos que sus homólogas en Castilla.

Parece ser que la Real Audiencia de Lima tuvo ciertos problemas en la relación existente entre los oidores y el virrey, sobre todo en lo referente a las competencias de ambos, que por otro lado era algo común. Así que fue bastante normal encontrar episodios de enfrentamiento entre el representante del monarca y la Audiencia, y en tantas ocasiones «desfavorables al vicesoberano»⁸⁹. De hecho, como menciona Brunke, «Felipe II recordaba al virrey del Perú, Francisco de Toledo, que al dirigirse a la Audiencia no debía hacerlo en nombre del monarca por vía de mandato, sino por carta “como a oidores

registro real en Panamá: la Real Audiencia y Cancillería en el siglo XVI”. *Revista de Humanidades*, 2014 (22); 47-73, p. 52.

⁸⁶ *Ibidem*, pp. 53-54.

⁸⁷ *Ibidem*, p. 55.

⁸⁸ GÁLVEZ MONTERO, J. F. “La Real Audiencia y su configuración en el virreinato”. *BIRA*, 1990 (17); 325-346, p. 332.

⁸⁹ PUENTE BRUNKE, J. de la. “La Real Audiencia de Lima, el virrey y la resolución de apelaciones contra actos de gobierno”. *Revista chilena de historia del derecho*, 2010, 1 (22); 593-602, p. 598.

nuestros y vuestros colegas”; y que debía honrar a la Audiencia, “porque el mandar a la Audiencia está reservado a Nos”»⁹⁰.

Las siguientes fueron las de Santafé de Bogotá, Charcas y Quito, creadas en los años 1548, 1559 y 1563 respectivamente. Parece haber variedad en las fechas de creación que se le atribuyen a la de Santafé, pues algunos autores como Carlos Miguel y Alonso la sitúan en 1548 y otros como Jorge Pérez Cañete en 1547⁹¹; de cualquier modo, por Real Cédula del 7 de julio de 1549 se le envió el real sello. Esta primera tendrá como jurisdicción

«(...) las Provincias del Nuevo Reyno (de Granada), y las de Santa Marta, Rio de San Juan, y la de Popoyan, excepto los Lugares que de ella están señalados á la Real Audiencia de Quito, y de la Guayana, ó Dorado, tenga lo que no fuere de la Audiencia de la Española, y toda la Provincia de Cartagena»⁹²

La Audiencia de Santa Fe hubo de hacer frente a una de las primeras rebeliones en las Indias, la de Lope de Aguirre en su búsqueda de libertad y contra los abusos de los delegados del gobierno castellano en el territorio americano. De esto modo, la institución tenía que defender no solo a la población, sino también el sello real, ya que hacerse con él suponía el rapto del monarca. A pesar de lo que se esperaba, Aguirre robó joyas y quemó los documentos que acreditaban el poder de los funcionarios⁹³.

Para la segunda de este grupo, la de Charcas, se presentó la iniciativa de crear el tribunal ya en 1551 y de la mano del Consejo de Indias. Cuatro años después, el fiscal de la Audiencia de Lima, Fernández de Recalde, dirigió una carta al Consejo señalando la necesidad de crear el organismo en la Plata de los Charcas. Pero hasta el 1 de junio de 1559 no comenzaron a ser nombrados los cargos, y el día 12 por fin se expidió la Real Cédula para la formación de esta⁹⁴.

Tampoco estuvo esta exenta de problemas, y desde el inicio, con la demarcación del territorio bajo su jurisdicción, ya se produjo el primer conflicto. Se publicó un

⁹⁰ *Idem*.

⁹¹ El propio Cañete cita a Margarita Gómez Gómez diciendo: «Su fundación tuvo lugar el 21 de mayo de 1547 y se le envió el sello por Real Cédula de 7 de julio de 1549», en PÉREZ CAÑETE, J. “El sello real como conflicto: apropiación y mal uso de la imagen del monarca en la Audiencia y Chancillería de Santa Fe (siglo XVI)”. *Revista de humanidades*, 2014 (22); 75-99, p. 78.

⁹² *Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias*, Tomo I, Libro II, Título XV, Ley VIII. Madrid: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 1998; p. 326.

⁹³ PÉREZ CAÑETE, J. *op. cit.* pp. 81 y ss.

⁹⁴ S.A. “La Audiencia de Charcas”. p. 125-126. Disponible en: <http://cort.as/-PXgW> (Consultado: 20/07/2019)

expediente sobre cuál debía ser ese territorio, pero las deliberaciones de otros funcionarios complicaron la situación y crearon confusión provocando que se estableciese un distrito provisional hasta el esclarecimiento definitivo⁹⁵, y por supuesto, los oidores no estuvieron de acuerdo. Estos, en varias quejas dirigidas al monarca, alegaron que el territorio que les habían asignado solamente contaba con «dos ciudades de españoles, La Plata y La Paz, y algunos pueblos de indios, dos de los cuales pertenecían a la provincia de Chucuito»⁹⁶. Las quejas se daban porque el territorio asignado no se asemejaba con lo pedido, que pretendían llegar hasta Cuzco, Chile, Tucumán, Juríes, Diaguitas y algunas provincias del Río de la Plata.

La Real Audiencia de Quito (*fig. 7*) se instaló en el territorio que tradicionalmente había ocupado el Reino de Quito, y concretamente en la ciudad de San Francisco de Quito. Por Real Cédula del 29 de agosto de 1563, Felipe II establece la necesidad de crear un nuevo tribunal en la ciudad, subordinado a la Audiencia de Lima, y cubriendo jurisdiccionalmente un territorio de unos 900.000 Km cuadrados⁹⁷. Aunque fue subordinada desde sus inicios, la Audiencia actuó con verdadera independencia, pero en torno a 1717 pasó a depender de la de Santa Fe; en 1720 pasó de nuevo a estar bajo la tutela de la Audiencia de Lima, para acabar en 1740 formando parte del virreinato de Nueva Granada⁹⁸.

Las últimas Audiencias en formarse fueron las de Concepción, en 1565, y posteriormente de Santiago, en 1609⁹⁹; la de Buenos Aires, en 1663, y la del Cuzco, en 1787.

5. LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y LOS INDÍGENAS

Los *iudex perfectus* que requería la Corona, y que actuaban en representación directa del rey, estaban avalados por el sello real, esto es, la máxima autoridad que les

⁹⁵ *Ibidem*, p. 127-129.

⁹⁶ *Ibidem*, p. 131.

⁹⁷ VALEREZO OLMEDO, B. R. “Reales Audiencias”. *Revista jurídica de la Universidad Católica de Guayaquil*, s.a; 356-390, 363.

⁹⁸ *Ibidem*, 364.

⁹⁹ Es necesario señalar que la clausura de la Audiencia de Concepción se debió a algunos problemas en su funcionamiento. Parece que el tribunal había sido situado en una zona que aún se encontraba por pacificar, por lo que era inútil. Al año siguiente de ser clausurada (1576) los vecinos reclamaron la necesidad de establecer un tribunal, esta vez en la ciudad de Santiago, pero las peticiones no tuvieron concreción en su respuesta hasta 1609, momento en que se estableció la Audiencia de Santiago. Para saber más, véase BARRIENTOS GRANDON, J. “La creación de la Real Audiencia de Santiago de Chile y sus ministros fundadores”. *Revista de estudios histórico-jurídicos*, 2003 (25); 233-338. Versión online disponible en <http://cort.as/-PmRB> (Consultado: 21/07/2019)

permite hablar en nombre del monarca. Esto, por supuesto, provocó que muchos de estos jueces actuaran creyéndose superiores al soberano, lo que generó ciertos problemas de corrupción y abuso de autoridad — y algunos serán tratados en el siguiente apartado. Para remediar estos problemas, y en caso de ser detectados, apartarlos de la práctica del oficio, se recurrió a *juicios de residencia* que verificasen la actuación de estos, buena o mala, asegurando la legalidad de los administradores de justicia. Solórzano Pereira menciona:

«I pasando aora adelante, digo, que no solo se contentò el cuidado de nuestros Reyes, i leyes, en tener á raya los Oidores, y otros Ministros de las Indias, con el temor de estas residencias que se les toman, qua(n)do salen de sus oficios, ò son promovidos à otros. Sino que aun tambien, dura(n)te el tie(n)po, uso, i exercicio en los mismos que tienen, si ay siniestra relacion de su proceder, è quexas considerables de las ciudades, i provincias donde sirven, i residen, se suelen frequentemente embiar jueces que los visiten en general, ò en particular, para tener con esto contentos à los Provinciales, i darles entera satisfacion en sus agravios, i estorvar que el daño no pase adelante»¹⁰⁰

Como se mencionará posteriormente, los juristas hubieron de actuar de forma excelentísima para no perder sus puestos ni ensombreceer el sagrado nombre de la justicia y la ley, porque como menciona Beccaria en su obra *De los delitos y las penas*,

«Las leyes son las condiciones mediante las cuales los hombres independientes y aislados se unieron en sociedad, cansados de vivir en continuo estado de guerra y de gozar de una libertad que resultaba inútil por la incertidumbre de conservarla. Sacrificaron una parte de ella para gozar del resto con seguridad y tranquilidad»¹⁰¹

Es por esto que con un sentido de la moralidad y una ética impecables tuvieron que obrar de igual modo, con la mayor equidad posible, para indígenas y españoles, y por ello, mientras el derecho indiano seguía su proceso de formación, las actuaciones en materia judicial fueron evolucionando de la mano de este. Así, tanto autóctonos como foráneos, encontraron en las Indias la justicia que, en principio, debía corresponderles, o al menos, así debía ser.

Si bien la justicia pudo cometer errores en el ámbito indiano, debido sobre todo a la actuación al tiempo que se creaba la legislación, y especialmente para con los indígenas, lo cierto es que se actuó sobradamente y con gran favor hacia estos. Es muestra de ello esta corta frase que dice así:

¹⁰⁰ SOLÓRZANO PEREIRA, J. de. *op. cit.* Tomo II; Libro V, Cap. X, p. 838.

¹⁰¹ Del original en italiano: «Le leggi sono le condizioni colle quali uomini indipendenti ed isolati si unirono in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra e di godere una libertà resa inutile dall'incertezza di conservarla. Essi ne sacrificarono una parte per goderne il restante con sicurezza e tranquillità», en BECCARIA, C. *De los delitos y las penas*. Madrid: Trotta, 2011; p. 111.

«Hay sobrada justicia todo a favor de los indios e que para los españoles contra los indios no hay ninguna»¹⁰²

Los indígenas, que desde los Reyes Católicos ya contaron con el favor real para asegurarles una vida justa en la medida que fuese posible dada la ausencia de los monarcas en las Indias, fueron objeto de debate. Establecer su condición jurídica significaba interferir en los intereses de muchos de los colonos indianos, pero la asunción de estos como personas *miserables* tenía raíces profundas que arraigaban en el derecho romano y la doctrina cristiana, y aparecía como una obligación social, un deber cívico que ya se mencionaba en las *Partidas*:

«E esto es, porq(ue) maguer el Rey es, tenuto de guardar todos los de su tierra señaladame(n)te lo deue fazer a estos porq(ue) son assi como desaparados, e mas sin co(n)sejo, q(ue) los otros (...) ca por tales como estos qua(n)do se alçaren a el, piedad e deue mouer para librarlos el mismo, o les dar quie(n) les libre luego»¹⁰³

De nuevo, el monarca habría de encargarse de amparar a los que en su reino contasen con una situación desfavorable, y como ya se mencionó con anterioridad, desde el sermón de Montesinos comenzó a llevarse a cabo la formulación del *corpus* legislativo indiano. De igual modo, surgieron figuras encargadas de la protección de los mismos, y los propios obispos asumieron esta función que acompañaba al cargo, y por la cual dispusieron de «amplios poderes para defender a los indígenas»¹⁰⁴. Fue Bartolomé de Las Casas quien consideró necesario aplicar las penas eclesiásticas a todo aquel que se propasase con los *miserables* indígenas, de modo que la excomunión, la negación de la absolución y el entredicho, serían suficientes para aquellos que transgrediesen la doctrina. Lamentablemente la teoría de Las Casas no pudo ser aplicada porque provocaba la pérdida de la jurisdicción real sobre los indígenas y entraba en conflicto con múltiples intereses¹⁰⁵.

A pesar de que el deseo de Las Casas no pudo producirse como tal, su teoría sirvió de base para la creación de instituciones y cargos que se encargasen de defender los intereses de los indígenas, especialmente, y como se va a ver a continuación, en el caso

¹⁰² GARCÍA MARÍN, J. M. *La justicia del rey en Nueva España*. Córdoba: Universidad de Córdoba, 2011; p. 91.

¹⁰³ LÓPEZ, G. *op. cit.* Tomo II, Partida III, Título XXVIII, Ley XX; p. 149. También Solórzano Pereira hace mención a esto en la *Política Indiana*: «Que los Indios son, i deben ser contados entre las personas, que el Derecho llama MISERABLES, i de que privilegios temporales gozen por esta causa, i de sus protectores» en SOLÓRZANO PEREIRA, J. de. *op. cit.* Tomo II, Libro II, Cap. XXVIII; p. 230.

¹⁰⁴ CUNILL, C. «El indio miserable: nacimiento de la teoría legal en la América colonial del siglo XVI». *Cuadernos Intercambio*, 2011 (9); 229-248, p. 232.

¹⁰⁵ *Ibidem*, p. 233.

de Nueva España, donde «el considerable dispositivo jurídico e institucional con que (...) contarán las autoridades españolas constituía, al menos en principio, un eficaz instrumento de dominación». No fue hasta la creación del Juzgado General de Indios, un tribunal ideado *ex profeso* para los indígenas en 1585, cuando la justicia actuó con una institución propia para estos, ya que anteriormente «la ley y el orden en la Nueva España reflejaban el relativo poder de las clases, así como el inevitable recurso al crimen y la violencia de los menos favorecidos»¹⁰⁶.

Durante el gobierno del virrey Antonio de Mendoza (primero de Nueva España entre 1535 y 1550) (*fig. 8*) se intentó crear una jurisdicción especial para los asuntos indios «dentro de la organización normal de los cargos bajo firme control real»¹⁰⁷. El virrey establecería el orden de los asuntos y su tratamiento en persona o cesión a la Audiencia o a organismos judiciales de menor importancia; además, determinaba la jurisdicción en que caían los casos, dirigía el modo de llegar a una decisión, y exigía que se le informase de la misma. No es de extrañar este férreo control sobre las instituciones de justicia si se tiene en cuenta que «la experiencia había demostrado que los mismos justicias en el cumplimiento de su misión incidían en abusos cuyos destinatarios eran frecuentemente los indefensos indios»¹⁰⁸. Y con esto habría que distinguir la jerarquización de la justicia para los indígenas: por una parte, la administrada por autoridades indias, y limitada a los niveles inferiores de la justicia criminal y civil; y por otra parte, la administrada por autoridades españolas¹⁰⁹.

Lo propuesto por Mendoza llevó a algunos problemas tanto con las audiencias como con los indígenas, que cada vez demandaban mayor y más efectiva justicia. Estos, cuyos pleitos y denuncias perdidas llevaban en apelación a las Audiencias, gozaban de «acceso ilimitado a los tribunales españoles y a asesoramiento jurídico ordinario»¹¹⁰. La suma de estos y otros problemas, sobre todo los derivados del control que el virrey pretendía sobre los organismos de justicia, llevaron al fracaso la labor de este en el intento por integrar a los indígenas en el derecho castellano. Pero fue con el virrey Luis de

¹⁰⁶ GARCÍA MARÍN, J. M. *op. cit.* p. 97.

¹⁰⁷ BORAH, W. *El Juzgado General de Indios en la Nueva España*. México: Fondo de Cultura Económica, 1996; p. 76 y ss.

¹⁰⁸ GARCÍA MARÍN, J. M. *op. cit.* p. 99.

¹⁰⁹ SÁNCHEZ VÁZQUEZ, R. “Juzgado General de Indios, paradigma para hacer menos desiguales a los desiguales durante la Nueva España”. En CARBONELL SÁNCHEZ, M. y CRUZ BARNEY, O. (coords.) *Historia y Constitución. Homenaje a José Luis Soberanes Fernández*, Tomo II. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2015; 447-492, p. 483.

¹¹⁰ BORAH, W. *op. cit.* p. 85.

Velasco y Castilla (octavo de Nueva España, 1590-1595) (*fig. 9*) con quien se estableció el Juzgado General de Indios, y aunque en cualquier otro momento esta reforma hubiese llevado mucho más tiempo, tanto Felipe II como el Consejo de Indias llevaban recibiendo quejas sobre el trato y la paupérrima justicia sobre los indios durante largo tiempo, lo que produjo que la creación de este organismo no se demorase demasiado.

Las bases del Juzgado quedaron fijadas por real cédula y carta del 9 de abril de 1591, y desde ese momento pudo dar comienzo su labor. Se permitió al virrey llevar a cabo personalmente investigaciones de funcionarios, así como participar como juez de primera instancia en el Juzgado para asegurar el buen obraje del mismo. Del mismo modo, nombró a dos agentes de indios: uno que haría la función de abogado defensor para estos, así como su traductor, y otro con función de asesor y consejero en las vistas judiciales¹¹¹. Asimismo, los indígenas no tuvieron que correr a cargo de los honorarios de los funcionarios, pues para ellos la justicia era gratuita, exceptuando a las comunidades y nobles, que aportaban la mitad que los españoles. Esto provocó todo tipo de quejas desde los inicios de la institución, ya que muchos funcionarios habían comprado sus cargos (práctica tan habitual como en España) y el beneficio obtenido por el desempeño de su función no cubría la inversión realizada¹¹², además de que «se dijo que (el Juzgado) movía a los indios a venir a México, a veces desde muy lejos (de más de quinientas leguas)»¹¹³. Como puede verse, el trabajo del Juzgado era entonces enorme.

Por ejemplo, Woodrow Borah hace relación de multitud de casos tratados por el Juzgado General, y en ellos se puede apreciar el funcionamiento de la justicia. En uno de ellos una comunidad indígena se queja del trato recibido por su alcalde, y el fallo determina que este tiene que dejar de actuar de tal modo¹¹⁴. En otro caso, un indígena llamado Gaspar Hernández protesta porque un español le obligaba a trabajar los domingos y festivos y si no lo hacía le castigaba, amén de haber secuestrado a su esposa e hijo. Aquí el virrey determinó la liberación de los secuestrados, además de amenazar al español con

¹¹¹ *Ibidem*, pp. 106-107.

¹¹² Dice Borah: una gran parte — en muchos casos la mayor — de los ingresos de funcionarios, notarios, escribanos y abogados, procedía de honorarios y costos, que habían sido suprimidos o enormemente reducidos por las reformas. Las quejas tenían una buena justificación, pues la mayoría de los funcionarios, agentes y notarios habían comprado sus cargos a la Corona, a precios calculados parcialmente sobre los ingresos que ahora se les vedaban» en *ibidem*, pp. 106-107.

¹¹³ SÁNCHEZ VÁZQUEZ, R. *op. cit.* p. 484.

¹¹⁴ «6 de octubre de 1628, ciudad de México. Los indios de Teticpac se quejan de que su alcalde mayor les exige gallinas y raciones de alimentos, los emplea como tamemes, etc. El virrey, en sesión en el Juzgado, ordena al alcalde mayor cesar con tales exacciones, pagar todos los alimentos obtenidos de los indios, no emplear a estos como tamemes y poner fin a toda práctica indebida» en BORAH, W. *op. cit.* p.162.

penas duras si volvía a actuar contra estos¹¹⁵. Por último, otra comunidad de indios clama por la exigencia del pago de tributos para obras públicas que les piden sus gobernadores. El Juzgado investiga el caso y resuelve que aquel tributo había sido prohibido 30 años antes, por lo que se estaba engañando a los indios. El fallo obliga al alcalde a impedir tal impuesto¹¹⁶.

A pesar del funcionamiento y carga de trabajo del Juzgado, lo cierto es que tuvo deficiencias, pero sirvió de ejemplo para la justicia en Indias y consiguió crearse una institución homóloga en el virreinato del Perú, también de la mano del virrey Luis de Velasco, que en 1603 consiguió el desarrollo del Juzgado de Indios del Cercado de Lima¹¹⁷.

6. LOS JURISTAS: EDUCACIÓN Y VIDA SOCIAL

El traspaso de las leyes castellanas a las Indias no solamente conllevó el *corpus* legislativo, sino también el modelo de justicia. Como apunta Carlos Garriga, «una justicia, así pues, de *jueces*, y no de *leyes*, porque concentraba la garantía en la persona y no en la decisión de los jueces»¹¹⁸, esto es, la dependencia del cumplimiento de la ley en base a la altura moral del juez. Y esto es realmente relevante, pues dado el alto nivel de corrupción se requería de personas que pudiesen desarrollar su labor de forma fiable sin dejar que cualquier tipo de influjo terminase manipulando sus decisiones. Un trabajo muy complicado, sobre todo debido a la distancia existente entre la metrópoli y las colonias. Pero para poder comprender la labor de los encargados de componer el derecho y de ponerlo en práctica es necesario comprender cuál fue la educación de estos en dicha

¹¹⁵ «20 de febrero de 1633., ciudad de México. Gaspar Hernández, indio de Tetzicapa, provincia de Jonotla y Tetela (?), se queja de que Gaspar Díaz, vecino y minero de Tetela, para quien trabaja, le obligó a laborar los domingos y días festivos, le ponía en cadenas o en el cepo si faltaba algún día, y ha secuestrado a la mujer y al hijo del indio. Hernández no debe nada a Díaz, pero este ha falsificado documentos. Solicita una orden al juez local para que libere a su mujer y su hijo, para que todos puedan volver a su pueblo. Pide que se prohíba a Díaz obligarlos a trabajar o molestarlos bajo amenaza de castigos severos. El virrey expide la orden solicitada» en *ibidem*, p. 190.

¹¹⁶ «30 de marzo de 1745-9 de junio de 1746, ciudad de México, Tlayacapan y Chalco. Los indios de Tlayacapan, provincia de Chalco por medio de dos indios procuradores y de otro, se quejan al Juzgado General de Indios de que sus gobernadores les cobran 4/ anuales por tributario en dos pagos, supuestamente para cuatequil (obras públicas). El Juzgado solicita un informe al párroco del lugar; este informa que tal impuesto ha sido costumbre inmemorial. Una investigación descubre un decreto del virrey Valero, del 24 de marzo de 1719, que prohibía tal cobro. El Juzgado ordena entonces al alcalde mayor de Chalco impedir todo impuesto por cuatequil» en *ibidem*, p. 204.

¹¹⁷ «El Juzgado General de Indios». Disponible en <http://cort.as/-Ot78> (Consultado: 17/07/2019).

¹¹⁸ GARRIGA, C. «Sobre el gobierno de la justicia en Indias (siglos XVI.XVII)». *Revista Historia del Derecho*, 2006 (34); 67-160, p. 87. El autor también apunta que «la única garantía de justicia era una *garantía moral*, por completo dependiente del comportamiento justo exteriorizado por el juez», lo que pone de manifiesto con mayor claridad lo dicho. En *Ibidem*, p. 88.

materia. Materia que, como ya se vio, era un compendio de las tradiciones históricas ibéricas.

6.1. EDUCACIÓN

Una vez realizada la conquista, el poder y gobierno militar fueron siendo sustituidos progresivamente por el imperio de las letras, adjudicando el desempeño de estos menesteres a hombres instruidos en materias relacionadas con el papel que habían de cumplir. Eso sí, siempre con el acento de la religión.

La monarquía de los Austrias siempre fue determinada como “católica”, lo que repercutía en todos los ámbitos, y la justicia también era uno de ellos. Sobre esto, Víctor Tau Anzoátegui señala que el Derecho común era insuficiente para la resolución de problemas en el Nuevo Mundo y «muchas veces los juristas deben avanzar a considerar puntos teológicos, y los teólogos deben a su vez penetrar en cuestiones jurídicas»¹¹⁹, lo que indica que la educación de los juristas se compuso de Derecho canónico y Derecho civil, al menos.

Los letrados (*fig* 10.), en su mayoría formados en Salamanca o Valladolid — por ser los dos grandes centros de estudios de derecho en Castilla¹²⁰ —, podían ostentar dos títulos: el de Sagrados Cánones y el de Leyes, los cuales otorgaban al estudiante el conocimiento «de los dos ordenamientos de la época, el civil y el canónico»¹²¹. Esto no significa que todos los graduados lo estuviesen en ambas disciplinas, de hecho, aquellos que solo disponían de uno — de los títulos — solían preferir el de derecho canónico, pues les habilitaba el acceso a la carrera eclesiástica. A pesar de esto, los que solamente dedicaban sus estudios a las leyes tenían que formarse en derecho romano, canónico y

¹¹⁹ TAU ANZOÁTEGUI, V. *El Jurista en el Nuevo mundo. Pensamiento. Doctrina. Mentalidad*. Frankfurt am Main: Max Planck Institute for European Legal History, 2016; p. 5. Del mismo modo, Tamar Herzog, refiriéndose a la Audiencia de Quito, y considerándolo extrapolable al resto de las instituciones indianas, extrae la siguiente tesis: «en el trabajo cotidiano del sistema jurídico, al menos en las remotas provincias de Indias y hasta mediados del siglo XVIII, el derecho erudito de orientación romana (*Ius Commune*) y estatal (la legislación real) estaba del todo ausente.», en HERZOG, T. “Sobre la cultura jurídica en la América colonial (siglos XVI-XVIII)”. *Anuario de historia del derecho español*, 1995 (65); 903-912, p. 903.

¹²⁰ También señala que la Universidad de Alcalá se especializó en estudios de teología. En PESET, M. “Las facultades de leyes y cánones. Siglos XVI a XVIII”. *Salamanca Revista de Estudios*, 2001 (47); 41-69, p. 43.

¹²¹ TAU ANZOÁTEGUI, V. *El taller del jurista*. Madrid: Universidad Carlos III, 2011; p. 15. Disponible en <http://cort.as/-NYz2> (Consultado: 13/07/2019).

preceptos cristianos¹²², por lo que todos los letrados tenían conocimientos en materia religiosa — y Carlos Garriga los denomina *sacerdotes iuris*¹²³.

En el grado de Leyes, por ejemplo, los estudiantes debían cursar durante cinco años una serie de cátedras, las cuales les otorgaban los conocimientos necesarios para todos los aspectos del derecho civil, véase, edictos, pactos, transacciones, compraventas, hipoteca y prenda, sucesiones, testamentos, herencias, *bonorum possessio* y colación, usucapión y prescripción, enfiteusis, arrendamiento y evicción, o derecho público romano¹²⁴, entre otros. Era tan grande el contenido de las cátedras, que en la mayoría de las ocasiones tenía que ser reducido o impartido de forma parcial o fragmentada por la escasez de tiempo.

En el caso de graduarse en derecho canónico y derecho civil, los estudios se centraban en el «*Decreto*, las *Decretales*, el *Sexto* y las *Extravagantes* (recopilaciones de derecho canónico de los siglos XII al XIV), el *Codex Justinianus*, el *Digesto* (derecho romano), y su análisis e interpretación por los escritores del *Ius Commune*, glosadores y comentaristas y el dogma y preceptos cristianos»¹²⁵. Pero las contradicciones habidas entre la filosofía del derecho, que distinguía un orden divino y uno humano, y la enseñanza de los juristas, que no hacía distinción, provocaba que estos no encontrasen la preparación necesaria para el ejercicio de la vida cotidiana, pues ni estos ni los teólogos podían ajustar su aprendizaje a las Indias.

Muy a pesar de la enorme preparación que parecían tener los letrados, en las universidades no hubo legislación regia y municipal hasta el siglo XVIII, y según la opinión del propio Consejo de Indias, estos eran «totalmente ineptos e incompetentes para servir de jueces»¹²⁶.

6.2.SALARIO, DONES Y VIDA SOCIAL

La vida de los juristas en las Indias no fue sencilla, pues fueron tantas las prohibiciones que se les hicieron que prácticamente tuvieron que vivir aislados del entorno social en que se encuadraba su jurisdicción.

¹²² HERZOG, T. *op. cit.* p. 906.

¹²³ GARRIGA, C. *op. cit.* p. 90.

¹²⁴ «El primero cursen en una de las cátedras de instituta, sin divertirse a oír código, ni digestos. El segundo año cursen en una de las cátedras de código, y le oigan sin derramarse a oír digestos. El tercero cursen en una de las cátedras de código, y oyendo este año dos lecciones de código podrán también oír digestos. El cuarto y quinto cursen en digestos en una de las cátedras de prima o vísperas.» en *idem*.

¹²⁵ HERZOG, T. *op. cit.* p. 906.

¹²⁶ *Ibidem*, p. 907.

Del juez se exigía una perfecta disciplina acorde a la ley y a la doctrina cristiana, basada tanto en las Sagradas Escrituras como en los escolásticos medievales que escribieron sobre conceptos tan abstractos como la duda. De este modo, se llevó a cabo un estricto control sobre la vida de los magistrados¹²⁷, ya que la calidad de la justicia dependía de una vida privada recta e impecable que no manchase la imagen del oficio, y que al mismo tiempo no perjudicase la figura de la Corona — que había delegado en estos funcionarios su voz. Así, las *visitas* se encargaron de regular el funcionamiento de las labores de los magistrados y de controlar el cumplimiento de las normas que les habían sido dictadas para su vida privada. Unas *visitas* llevadas a cabo por funcionarios escogidos «cuidadosamente por el Rey y el Consejo de Indias entre juristas valiosos de Castilla, a veces prelados o inquisidores»¹²⁸, y que, en ocasiones, se excedían respecto al rigor de su relación con los visitados.

Guiadas las autoridades reguladoras por preceptos cristianos, una de las grandes cuestiones a vigilar fue la retribución del cargo. Los magistrados recibían un salario justo por su labor en las Indias; salario que debía ser más que suficiente para alejarles de la avaricia y la ambición por pretender acumular capitales en labores extraoficiales, «por(ue) no puede aver rastro de justicia en el coraçó(n) en que la avaricia se hizo morada, segú(n) la doctrina de S. Leó(n) Papa»¹²⁹. Por lo que de la retribución de los jueces se desprende un intento por mantenerlos fieles al compromiso con la justicia, debido principalmente a que esta se basaba en la confianza entre los pleiteantes y los funcionarios; en la fidelidad¹³⁰. También, y retomando el asunto de la concepción cristiana de la moral de los funcionarios, hay que comprender la avaricia como un pecado capital, por eso todo tipo de trabajos extra fueron prohibidos y castigados.

El salario de los magistrados indianos era superior que el de los que desarrollaron su oficio en Castilla, y por eso mismo «tenían rigurosamente prohibido el desarrollo de cualquier actividad distinta (...), lo que muy especialmente afectaba a los tratos, contratos

¹²⁷ GARRIGA, C. *op cit.* p. 87.

¹²⁸ SÁNCHEZ BELLA, I. “Eficacia de la visita en Indias”. *Anuario de historia del derecho español*, 1980 (50); 383-412, p. 389, 392.

¹²⁹ SOLÓRZANO PEREIRA, J. *op. cit.* Tomo II; p. 778. Disponible en: <http://cort.as/-NiF3> (Consultado: 14/07/2019).

¹³⁰ García Marín cita una explicación de Vicéns Vices sobre este mismo asunto: «la reclamación de un *salario justo* está en relación ... con la revolución de precios del siglo XVI y la disminución del salario real hacia 1600; pero posiblemente también indica el desprendimiento de la función administrativa del viejo concepto feudal de fidelidad y la entrada en el campo de la mecanización de las relaciones entre estado y funcionario», en GARCÍA MARÍN, J. M. *op. cit.* p. 130.

y granjerías de toda suerte en el distrito o término de su jurisdicción»¹³¹. Aunque esto no ocurrió para todos los magistrados, sino para aquellos de carácter temporal; los magistrados perpetuos pudieron desarrollar algunas de estas actividades para mantenerse, y Gregorio López, glosador de las *Partidas*, espetó la necesidad de salarios altos para los funcionarios sin oposición regia, pues en caso de que eso sucediese — que el monarca no aprobase retribuciones altas para los magistrados — podría interpretarse como una afrenta al trabajo para el Estado¹³². Lo cierto es que los salarios fueron en aumento durante el transcurso de los años, pero en determinado momento no fueron del todo satisfactorios, sobre todo si se había accedido al cargo mediante la compra del mismo, acto que suponía recuperar la inversión de forma rápida, y para lo que había que recurrir a aquello que se encontraba prohibido¹³³. Fue por esto, y para evitar todo tipo de corruptelas y acumulaciones de capital, que en 1621 se publicó la disposición que obligó a los magistrados a presentar «inventario y declaración de patrimonio»¹³⁴.

De igual modo, y desde el momento en que se produjo la patrimonialización de los cargos públicos, las corruptelas aumentaron de forma exponencial, aun cuando — y como ya se mencionó en este mismo apartado — todo tipo de ingresos oficiosos estaban prohibidos. Tal es el caso de las dádivas y los dones, tan censurados como las demás actividades que reportasen beneficios; pero incluso, para prevenir de la consecución de este tipo de presentes, los juristas tenían prohibido el establecimiento de relaciones sociales en el ámbito jurisdiccional en el que practicaban su oficio. Porque entablar amistades podía suponer actuar en favor del pleiteante, y eso hacía que se perdiese la imparcialidad de la que había de hacer gala un magistrado; y también, porque podía comprarse esta mediante cualesquiera dádivas o favores. La *limpieza de manos* también era un asunto escabroso, y todos y cada uno de los funcionarios debía cumplirlo con extrema rigurosidad.

«advierto, que para que los dichos Oidores conserven mejor este honor, i dignidad de que voy tratando, i sean mas observantes de la entereza, i limpieza, i demás obligaciones de

¹³¹ GARRIGA, C. *op. cit.* p. 99.

¹³² GARCÍA MARÍN, J. M. *op. cit.* p. 130.

¹³³ Esto está bien apoyado por las palabras de García Marín sobre el coste de la justicia en América: «Y es que en América, como en Castilla, el funcionamiento del complejo aparato judicial requería dinero. Las retribuciones de los jueces en sus diferentes categorías, de los auxiliares de la justicia en su profusa variedad, así como todo el complejo de actividades (diligencias, indagaciones, práctica probatorias, isitas, pesquisas, residencias, etc.) que la aplicación de la justicia llevaba consigo, hacían necesaria una inversión en recursos económicos que el estado del Antiguo Régimen no parecía capaz de realizar», en *Ibidem*, p. 134.

¹³⁴ GARRIGA, C. *op. cit.* p. 102.

su oficio, que tanto se les encargan, es justo i conveniente que estèn, (como en todas las Audiencias lo están) bien acomodados, i pagados en sus salarios»¹³⁵

Los dones por amor, derivados de la amistad, y en ningún caso otorgados a cambio de algo, estaban consentidos, pues llegaba a entenderse como un acto desinteresado que no reportaba beneficios a ninguna de las partes por tratarse de regalos — habitualmente — consumibles (comida y bebida como norma general). Y es que solamente una cosa tenían que tener clara los juristas: «vender la justicia era una forma de vender al mismo Dios»¹³⁶, y consecuentemente y en conjunto, a la Monarquía católica.

«No solo deben los Virreyes, Presidentes, Oidores, i demás Ministros de las Audiencias de las Indias, ir, i proceder en su Ministerio con el cuidado, recaro, entereça, i limpieça, que se ha dicho en los capítulos passados, sino también deben estar advertidos, de mientras tuvieren, i exercieren los dichos oficios, no pueden casarse, ni sus hijos, i hijas, en todo el distrito de las tales Audiencias. La qual prohibicion se funda en infinitos Textos del derecho común, i de nuestro Reino»¹³⁷

Efectivamente, también las prohibiciones alcanzaban aspectos profundos de la vida privada de los magistrados, como es el caso de los matrimonios. Matrimonios que pretendían evitarse por poder ser realizados bajo coacción, debida principalmente al abuso de autoridad de los magistrados, que sirviéndose de su posición pretendían establecer relaciones sentimentales con mujeres a las que, se entiende, chantajeaban con las posibles consecuencias de no conseguir lo deseado — lo que Garriga denomina *terror offici*¹³⁸.

A este asunto Solórzano Pereira le dedica un capítulo completo en su *Política Indiana*, y ya en las *Leyes de Indias* se había dispuesto la prohibición expresa del casamiento sin licencia real el 10 de febrero de 1575, a lo que cabría añadir leyes de carácter aún más prohibitivo que además concretaban la pena impuesta por el incumplimiento de la ley. De un lado,

«Por los inconvenientes que se han reconocido, y siguen de casarse los Ministros que nos sirven en las Indias, y sus hijos en ellas; y porque conviene á la buena administración de nuestra justicia, y lo demas tocante á sus oficios, que estén libres de parientes y deudos

¹³⁵ Como puede verse siempre se hace hincapié en el hecho de que los funcionarios tienen que cobrar salarios justos para no incurrir en delitos con los que conseguir más dinero. En SOLÓRZANO PEREIRA, J. de. *op. cit.* Tomo II; p. 780.

¹³⁶ GARRIGA, C. *op. cit.* p. 114.

¹³⁷ SOLÓRZANO PEREIRA, J. de. *op. cit.* Tomo II; p. 822.

¹³⁸ GARRIGA, C. *op. cit.* p. 119. Sobre esto dice Solórzano Pereira: «el miedo, è impresion que causa, ò pude causar à los subditos el mando i autoridad de sus cargos, haze faltos de libertad i sospechosos de violencia, i tyrania, semejantes matrimonios», en SOLÓRZANO PEREIRA, J. de. *op. cit.* Tomo II; p. 822.

en aquellas partes, para que sin aficion hagan y exerzan lo que es á su cargo, y despachen y determinen con toda entereza los negocios de que conocieren, y no haya ocasion, ni necesidad de usar las partes de recusaciones, ni otros medios para que se hayan de abstener del conocimiento: Prohibimos y defendemos que sin nuestra licencia particular, como en nuestros Reynos se hace, los Virreyes, Presidentes y oidores, Alcaldes del Crímen y Fiscales de nuestras Audiencias en las Indias, se puedan casar, ni casen en sus distritos; y lo mismo prohibimos á sus hijos, é hijas durante el tiempo que los padres nos sirven en los dichos cargos, pena de que por el mismo caso queden sus plazas vacas, y desde luego las declaramos por tales, para las proveer en otras personas que fuere nuestra voluntad»¹³⁹

Y de otro,

«Declaramos que por el mismo caso, que cualquiera de los Ministros u personas contenidas en las leyes antes de esta, tratare ó concertare de casarse por palabra, ó promesa, ó escrito, ó con esperanza de que les habemos de dar licencia para que se puedan casar en los distritos donde tuvieren sus oficios, ó enviaren por ella, incurran asimismo en privacion de sus oficios, como si verdaderamente efectuaran sus casamientos, y que no puedan tener, ni obtener otros algunos, de ninguna calidad que sean, en las Indias»¹⁴⁰

Así pues, queda demostrado que el establecimiento de cualquier tipo de relación social de los magistrados con el entorno de su jurisdicción conllevaba la pérdida de su oficio en cualquier parte de las Indias donde pudiese ejercerlo. Un ejemplo claro de la seriedad con la que la justicia era tomada por parte de la Corona, aunque si se tiene en cuenta que los jueces actuaban como boca del monarca, parece lógico que las penas establecidas para cualquier tipo de delito fuesen realmente severas, ya que la mínima incoherencia entre los administradores de justicia y esta suponía el enturbiamiento de la imagen de los soberanos.

CONCLUSIONES

El derecho indiano apareció en América como respuesta a una situación de precariedad judicial. La base fundacional fueron las quejas de algunos religiosos hacia la Corona por el trato administrado a los indígenas, pero debe considerarse la labor de los funcionarios, o más bien la mala praxis de estos, el detonante verdadero para la creación del código legislativo americano.

A la luz de los acontecimientos las Indias parecían abocadas al fracaso tras los acontecimientos vividos durante los primeros compases de la conquista, pero poco a poco,

¹³⁹ *Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias*, Tomo I, Libro II, Título XVI, Ley LXXXII. Madrid: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 1998; pp. 390-391.

¹⁴⁰ *Ibidem*, Ley LXXXIV.

y tras una labor de más de tres siglos, fue ejerciéndose un control más o menos estable de lo que allí acontecía. Las experiencias previas en las Antillas no auguraban un futuro prometedor en materia judicial, pero las leyes dispuestas para los territorios españoles en América otorgaron, principalmente a los indígenas, por ser los verdaderos beneficiarios de esta, una legislación copiosa y toda una serie de tribunales en los que pleitear contra los malos tratos. Y no solo eso, sino también dos tribunales exclusivos que funcionaron con relativa efectividad para contrarrestar las carencias del sistema judicial de las Audiencias que habían sido constituidas durante largos años.

Las comunidades indígenas pudieron ser gobernadas por sus homólogos, aunque no siempre gozaron de libertad en la elección de sus soberanos, ya que en ocasiones estos respondieron a los intereses de la Corona. En general, las tradiciones y costumbres indias permanecieron de un modo u otro para el pleiteo en los tribunales en un intento por defender a los naturales de las fechorías de los colonos; sin embargo, y atendiendo a lo que se mencionó en el primer apartado, esto respondía al deseo de los monarcas de mantener unos territorios y a sus habitantes bajo su sometimiento intentando evitar los levantamientos.

En general, y a pesar de las carencias, la labor llevada a cabo otorgó a los territorios americanos su particular legislación y un marco judicial en el que solucionar los conflictos entre sus habitantes. Todo esto en un entorno donde la corrupción se encontraba a la orden, al igual que en España, y donde en muchas ocasiones los conflictos eran dirimidos por principios judeocristianos debido a la formación de los letrados en materias eclesiásticas.

En definitiva, la gobernabilidad de las Indias pasaba por limitar el poder de los delegados del monarca asegurando la legitimidad del señorío castellano mediante instituciones y todo lo derivado de estas. El transporte de Castilla a las Indias requería el seguimiento del modelo peninsular adaptándolo a las nuevas circunstancias, otorgándole un carácter muy particular que se nutrirá de las peculiaridades del territorio americano y no terminará de formarse hasta bien transcurrido el siglo XVII.

ANEXOS



Fig. 1. *Carlos V como dominador del mundo. Peter Paul Rubens.*

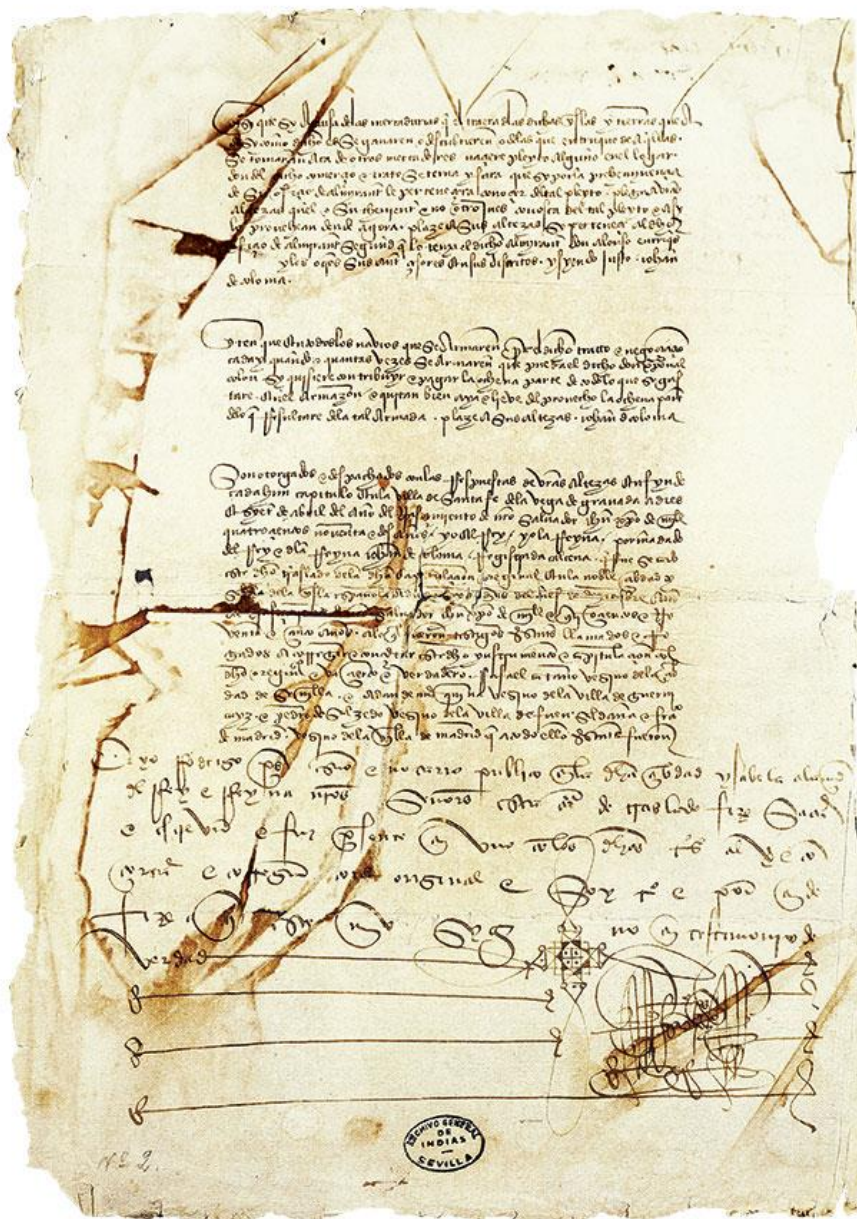


Fig. 2. Fragmento de las capitulaciones de Santa Fe. Archivo General de Indias.



Fig. 3. Pizarro mostrándole a Carlos V las maravillas del Imperio Inca.



Fig. 4. Retrato de Alejandro VI por Cristofano dell'Altissimo.

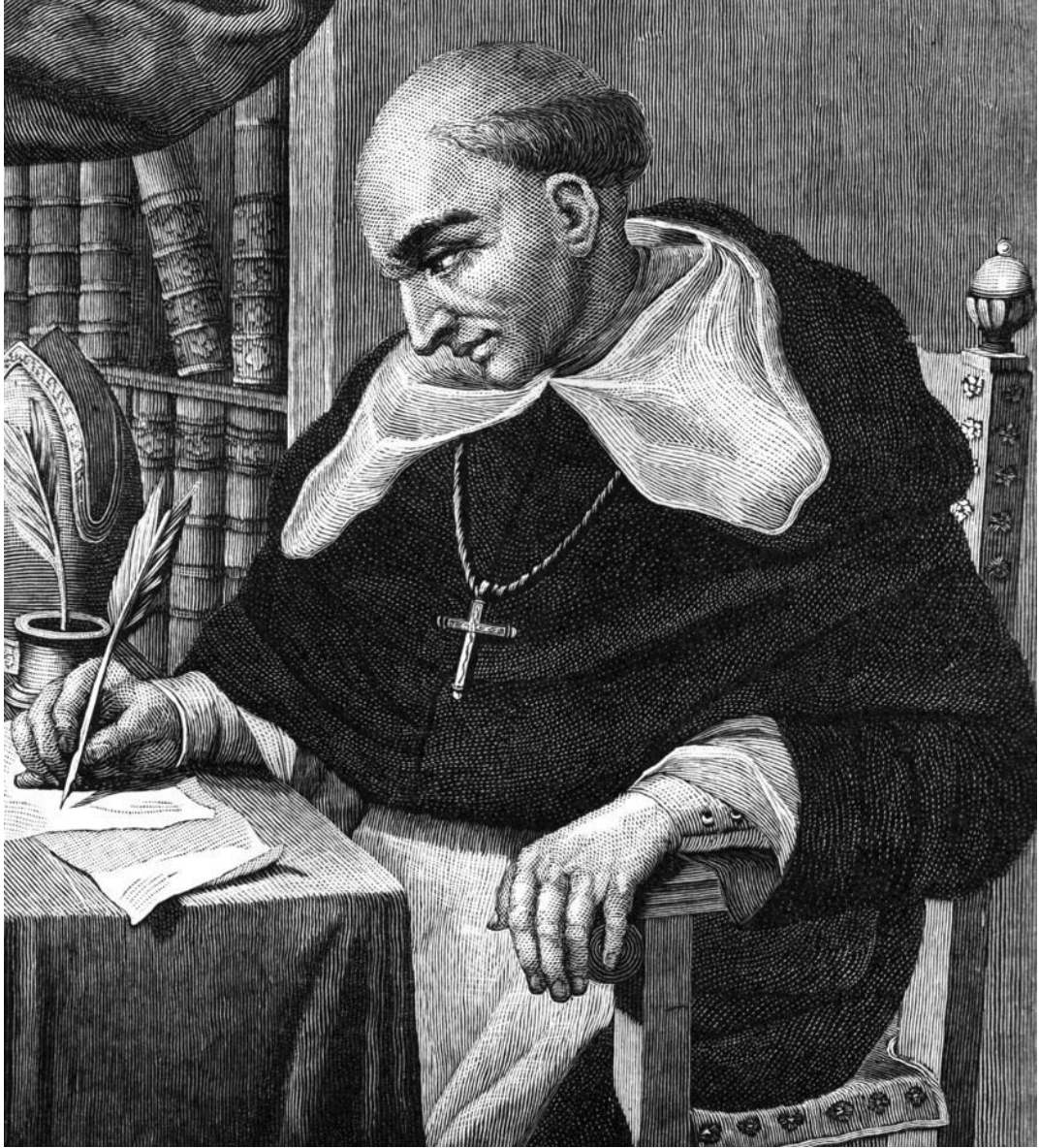


Fig. 5. *Bartolomé de Las Casas.*

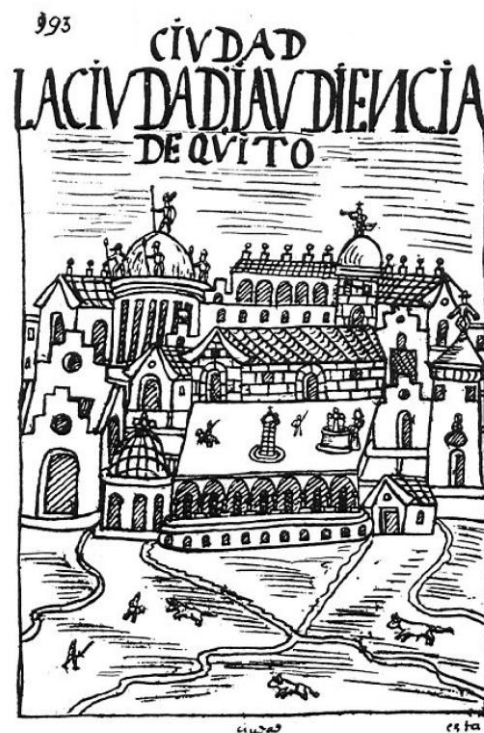




Fig. 8. Antonio de Mendoza y Pacheco, primer virrey de Nueva España.



Fig. 9. Luis de Velasco y Castilla, octavo virrey de Nueva España.



Fig. 10. Juan de Solórzano por Roberto Cordier, el letrado por excelencia. Biblioteca Nacional de España.

BIBLIOGRAFÍA

- ANDRÉS SANTOS, F. J. “Los proyectos de recopilación del derecho indiano en época de Felipe IV”. *AFDUDC*, 2007 (11); 45-69.
- ARANDA, R. *Colección de documentos sobre Perú*, Tomo I. Lima: Imprenta del Estado, 1890.
- BALLESTEROS, M., BRAVO, C. Y LÓPEZ, L. E. “La conquista de Perú”. *Cuadernos historia* 16, 1985 (52); 3-30.
- BARRIENTOS GRANDON, J. “La creación de la Real Audiencia de Santiago de Chile y sus ministros fundadores”. *Revista de estudios histórico-jurídicos*, 2003 (25); 233-338.
- BECCARIA, C. *De los delitos y las penas*. Madrid: Trotta, 2011.
- BEJARANO ALMADA, M. L. “Las Bulas Alejandrinas: detonantes de la evangelización en el Nuevo Mundo”, *Revista de El Colegio de San Luis*, Nueva época, 2016 (12); 224-257.
- BERNAL, B. “El derecho castellano dentro del sistema jurídico indiano”, *Anuario Mexicano de Historia del Derecho*, 1998 (10); 89-105..
- BERNAL, B. “Las características del Derecho Indiano”, *Historia de México*, XXXVIII, 1989 (4); 663-675.
- BORAH, W. *El Juzgado General de Indios en la Nueva España*. México: Fondo de Cultura Económica, 1996.
- BURILLO, J. “Francisco de Vitoria: los títulos legítimos a las Indias”. *Glossae. Revista de Historia del Derecho Europeo*, 1998 (1); 166-177.
- BURILLO, J. “Francisco de Vitoria: los títulos legítimos a las Indias”. *Glossae. Revista de Historia del Derecho Europeo*, 1998 (1); 166-177.
- CARBONELL SÁNCHEZ, M. y CRUZ BARNEY, O. (coords.) *Historia y Constitución. Homenaje a José Luis Soberanes Fernández*, Tomo II. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2015; 447-492.
- CHUNGA HIDALGO, L. “Las comunidades de indios en el derecho indiano”. *Revista jurídica online*, 2009 (26); 359-372.
- COVARRUBIAS, S. de. *Tesoro de la lengua castellana o española*, Segunda parte.
- CRISTÓBAL COLÓN, *Los cuatro viajes del almirante y su testamento*. Biblioteca virtual universal.

- CUNILL, C. “El indio miserable: nacimiento de la teoría legal en la América colonial del siglo XVI”. *Cuadernos Intercambio*, 2011 (9); 229-248.
- FERNANDEZ URRESTI, M. *Colón: el almirante sin rostro. Una biografía heterodoxa*. Madrid: EDAF, 2006.
- GÁLVEZ MONTERO, J. F. “La Real Audiencia y su configuración en el virreinato”. *BIRA*, 1990 (17); 325-346.
- GARCÍA GALLO, A. “El derecho común ante el Nuevo Mundo”, *Revista de estudios políticos*, 1955 (80); 138-155.
- GARCÍA GALLO, A. *Manual de Historia del Derecho español. El origen y la evolución del Derecho*, Tomo I. Madrid: Artes Gráficas y Ediciones, 1982.
- GARCÍA ICAZBALCETA, J. *Colección de documentos para la historia de México*, Tomo II. México: Antigua Librería, 1866.
- GARCÍA MARÍN, J. M. *La justicia del rey en Nueva España*. Córdoba: Universidad de Córdoba, 2011.
- GARRIGA, C. “Sobre el gobierno de la justicia en Indias (siglos XVI.XVII)”. *Revista Historia del Derecho*, 2006 (34); 67-160.
- GÓMEZ GÓMEZ, M. “La Cancillería Real en la Audiencia de Santo Domingo”. *Revista de Humanidades*, 2014 (22); 17-45.
- GRENNI, H. “El lugar del indio en el Derecho Indiano”. *Teoría y Praxis*, 2008 (12), s.pp.
- GRENNI, H. “Las Leyes de India: un intento por considerar a los indígenas como personas con derechos”. *Teoría y Praxis*, s.f. (4); s.pp.
- HANKE, L. *La lucha por la justicia en la conquista de América*. Madrid: Istmo, 1988.
- HERNAN CORTÉS, *Cartas de la conquista de México*. Madrid: Sarpe, 1986.
- HERZOG, T. “Sobre la cultura jurídica en la América colonial (siglos XVI-XVIII)”. *Anuario de historia del derecho español*, 1995 (65); 903-912.
- HEVIA BOLAÑOS, J. de. *Curia Philipica*, Primera parte.
- JORDAN DE ASSO Y DEL RIO, I. y MANUEL Y RODRÍGUEZ, M. de. *El ordenamiento de leyes, que D. Alfonso XI hizo en las Cortes de Alcalá de Henares el año de mil trescientos cuarenta y ocho*. Madrid: Imprenta de Don Alejandro Gómez Fuentenebro, 1847.

- LAIGLESIA, F.de (ed.). *Instrucciones y consejos del emperador Carlos V a su hijo Felipe II al salir de España en 1543*. Madrid: Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, 1908.
- LÓPEZ, G. *Las Siete Partidas del sabio rey don Alfonso el nono, nuevamente glosadas por el Licenciado Gregorio Lopez del Consejo Real de Indias de Su Magestad*, Tomo I. Madrid: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 1985.
- MACHUCA CHÁVEZ, C. P. “Colima entre las audiencias de México y la Nueva Galicia. Historia de un conflicto jurisdiccional”. En REYES, J. C. (ed.) *Memoria. IV Foro Colima y su Región. Arqueología, antropología e historia*. México: Gobierno del Estado de Colima, Secretaría de Cultura, 2008.
- MARILUZ URQUIJO, J. M. “El derecho prehispánico y el derecho indiano como modelos del derecho castellano”, *Actas y Estudios del III Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Internacional*. Madrid: Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 1973; 101-113.
- MEJÍAS, M. J. “El nacimiento de la última Audiencia indiana. Sede, artistas y costes de la Audiencia del Cuzco”, *Laboratorio de Arte*, 1995 (8); 193-206.
- MIGUEL Y ALONSO, C. de. “Las audiencias en los reinos y señoríos de las Indias”. *Cuadernos Hispanoamericanos*, 1959 (116-117); 189-204, p. 193.
- MORALES PADRÓN, F. *Historia del descubrimiento y conquista de América*. Madrid: Editora Nacional, 1981.
- MORALES PADRÓN, F. *Teoría y leyes de la conquista*. Madrid: Ediciones Cultura Hispánica del Centro Iberoamericano de Cooperación, 1979.
- ORTEGA LÓPEZ, R. *Apuntes sobre la conquista española y la ocupación*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 1945.
- OTS CAPDEQUI, J. M. *El Estado español en las Indias*. México: El Colegio de México, 1941.
- OWENSBY, B.P. “Pacto entre rey lejano y súbditos indígenas. Justicia, legalidad y política en Nueva España, siglo XVII”. *Historia de México*, LXI, 2011 (1); 59-106.
- PACHECO, J. F., CÁRDENAS, F. Y TORRES DE MENDOZA, L. (dirs.) *Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y colonización de las posesiones españolas en América y Oceanía, sacados, en su mayor parte, del Real Archivo de Indias*, Tomo I. Madrid: Imprenta de M. Bernaldo de Quirós, 1864.

- PARKER, G. *Carlos V. Una nueva vida del emperador*. Barcelona: Planeta, 2019.
- PÉREZ CAÑETE, J. “El sello real como conflicto: apropiación y mal uso de la imagen del monarca en la Audiencia y Chancillería de Santa Fe (siglo XVI)”. *Revista de humanidades*, 2014 (22); 75-99.
- PIZARRO ZELAYA, A. “Leyes de Burgos: 500 años”. *Diálogos: Revista de Historia*, 2013, vol. 14 (1); 31-78.
- PRESCOTT, W. H. *Historia de la conquista de México*, Tomo I. México: Ignacio Cumplido, 1844.
- PUENTE BRUNKE, J. de la. “La Real Audiencia de Lima, el virrey y la resolución de apelaciones contra actos de gobierno”. *Revista chilena de historia del derecho*, 2010, 1 (22); 593-602.
- *Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias*. Madrid: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 1998.
- S.A. “La Audiencia de Charcas”.
- SAAVEDRA FAJARDO, D. “Idea de un príncipe político cristiano” (edición de Enrique Suárez). *Lemir-Textos*, nº 20, 2016; 519-968.
- SÁNCHEZ BELLA, I. “Eficacia de la visita en Indias”. *Anuario de historia del derecho español*, 1980 (50); 383-412.
- SÁNCHEZ VÁZQUEZ, R. “Juzgado General de Indios, paradigma para hacer menos desiguales a los desiguales durante la Nueva España”.
- SANZ GARCÍA-MUÑOZ, M. A. “El sello y registro real en Panamá: la Real Audiencia y Cancillería en el siglo XVI”. *Revista de Humanidades*, 2014 (22); 47-73.
- SOLÓRZANO PEREIRA, J. de. *Política indiana*, Tomos I y II.
- SUÁREZ, F. “La costumbre indígena en el derecho indiano”. *Anuario de la Facultad de Derecho*, 1995-1996 (5); 119-152.
- TAU ANZOÁTEGUI, V. *El Jurista en el Nuevo mundo. Pensamiento. Doctrina. Mentalidad*. Frankfurt am Main: Max Planck Institute for European Legal History, 2016.
- TAU ANZOÁTEGUI, V. *El taller del jurista*. Madrid: Universidad Carlos III, 2011.
- VALLEJO GARCÍA-HEVIA, J. M. *Estudios de Instituciones Hispano-Indianas*, Tomo I. Madrid: Imprenta Estatal Boletín Oficial del Estado, 2015.

- VAS MINGO, M. M. del. “Hernán Cortés, capitulante”. *Quinto Centenario*, 1985 (9); 157-174.

WEBGRAFIA

- “El Juzgado General de Indios”. Disponible en <http://cort.as/-Ot78> (Consultado: 17/07/2019).
- “Texto del sermón de Antón Montesino según Bartolomé de Las Casas y comentario de Gustavo Gutierrez”. *Conmemoración de los 500 años del Sermón de Antón Montesino y la primera comunidad de dominicos en América*, 21 diciembre 1511 – 2011; pp. 6-7. En versión digital disponible en <http://cort.as/-PnJS> (Consultado: 23/07/2019).
- *Instrucciones al comendador fray Nicolás de Ovando, gobernador de las Islas y Tierra Firme del mar Océano, para el buen tratamiento de los indios*. 16/08/1501. Disponible en <http://cort.as/-PXqK> (Consultado: 12/07/2019).
- *Título de Capitán General de la Nueva España y costa del Sur, expedido a favor de Hernán Cortés por el Emperador, por Carlos I de España y V de Alemania*. 06/07/1529. Disponible en <http://cort.as/-MvQr> (Consultado: 14/07/2019).

IMÁGENES

- *Carlos V como dominador del mundo*. Extraído de <https://www.arteconografia.com/2015/04/carlos-v-como-dominador-del-mundo.html>
- *Capitulaciones de Santa Fe*. Extraído de https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/cristobal-colon-y-los-reyes-catolicos-las-capitulaciones-de-santa-fe-y-sus-4-viajes_10372
- *Retrato de Alejandro VI por Cristofano dell'Altissimo*. Extraído de https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_VI#/media/Archivo:Pope_Alexander_V_i.jpg
- *Pizarro mostrándole a Carlos V las maravillas del Imperio Inca*. Extraído de https://es.wikipedia.org/wiki/Capitulaci%C3%B3n_de_Toledo#/media/Archivo:Francisco_Pizarro_ante_Carlos_V.jpg
- *Bartolomé de Las Casas*. Extraído de <http://www.quenotelacuenten.org/2016/10/02/video-fray-bartolome-de-las-casas-parte-1/>

- *Buen gobierno pricidente i oidores desumagd y alcaldes de corte y Fiscal alguazil mayor desterreyno.* Felipe Guaman Poma de Ayala. Primera corónica y buen gobierno, 1615. Extraído de <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-74476.html>
- *La civdad i avdiencia de Qvito.* Felipe Guaman Poma de Ayala. Primera corónica y buen gobierno, 1615. Extraído de <https://www.artehistoria.com/es/obra/la-ciudad-y-audiencia-de-quito>
- *Retrato de Antonio de Mendoza y Pacheco, primer virrey de Nueva España.* Extraído de <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AntonioMendoza.jpg>
- *Retrato de Luis de Velasco y Castilla, octavo virrey de Nueva España.* Extraído de <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LuisdeVelascoII.jpg>
- *Juan de Solórzano por Roberto Cordier.* Extraído de https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Sol%C3%B3rzano_Pereira#/media/Archivo:Politica_indianapor_Iuan_de_Solorzano_Pereira.jpg